

Tiempos de estallidos sociales



Ilustración portada: montaje con
fotos de uso libre en Internet.

Fuentes: *Hugo Morales/Wikimedia,*
CONAIE, Hispantv. Pintura Pavel E.

Diseño editorial: **Verónica León**

Publicación internacional de
análisis y opinión de la Agencia
Latinoamericana de Información

ISSN No. 1390-1230

Director: Osvaldo León

ALAI: Dirección postal

Casilla 17-12-877, Quito, Ecuador

Sede en Ecuador

Av. 12 de Octubre N18-24 y Patria,

Of. 503, Quito-Ecuador

Tel: (593-2) 2528716 - 2505074

Fax: (593-2) 2505073

URL: <http://alainet.org>

Redacción:

info@alainet.org

Publicidad:

alaiadmin@alainet.org

ALAI es una agencia informativa, sin
fines de lucro, constituida en 1976
en la Provincia de Quebec, Canadá.

Las informaciones contenidas en esta
publicación pueden ser reproducidas
a condición de que se mencione
debidamente la fuente y se haga
llegar una copia a la Redacción.

Las opiniones vertidas en los artícu-
los firmados son de estricta respon-
sabilidad de sus autores y no reflejan
necesariamente el pensamiento de
ALAI.

AMERICA LATINA *en movimiento*

Tiempos de estallidos sociales

- 1 América Latina entre los futuros posibles
y el fantasma medieval
Mónica Bruckmann
- 5 El caso de Ecuador:
Imperialismo impone dictaduras de nuevo tipo
Mario Ramos
- 9 La crisis de Haití: punto de bifurcación y
no retorno
Lautaro Rivara
- 13 Insurrección en Chile: Asamblea Constituyente
libre y soberana
Silvia Arana
- 16 Colombia entre la democratización y
el tradicionalismo
Pedro Santana Rodríguez
- 19 Perú en tiempo de plagas y retardos
Hugo Cabieses
- 24 Derrota electoral de Macri y la impugnación
a la ofensiva del capital en Nuestramérica
Julio C. Gambina
- 28 Uruguay: los pliegues de una excepcionalidad
histórica
Emilio Cafassi
- 31 Bolivia ante el peligro del retroceso histórico
y de la restauración neoliberal
Eduardo Paz Rada

América Latina entre los futuros posibles y el fantasma medieval

Mónica Bruckmann

El Siglo XX estuvo fuertemente marcado por momentos de gran ascenso y avances de las fuerzas progresistas y profundos retrocesos consecuencia de movimientos políticos de reacción a estos avances. A cada reforma, le sucedió una contra-reforma económica, política y cultural. Al avance de la socialdemocracia europea de principios del siglo XX, que condujo a los proyectos socialistas y antiimperialistas, le sucedió la emergencia del fascismo en todo el continente y su proyección planetaria. A la acumulación política de las fuerzas populares en América Latina desde mediados del siglo XX que llevó al gobierno a Salvador Allende en Chile, a Juan Domingo Perón en Argentina o a Joao Goulart en Brasil, le siguieron cuentas dictaduras militares y programas económicos neoliberales que se extendieron como proyecto económico hegemónico hasta fines del siglo XX, aún después de los procesos de redemocratización en el continente.

No es muy diferente lo que ocurrió a inicios del siglo XXI en América Latina. La primera década y media de este siglo sustituyó la hegemonía neoliberal por la hegemonía de proyectos progresistas, de izquierda o de centro izquierda, como prefiera el lector. Vimos multiplicarse las políticas de redistribución de renta a través de políticas de inclusión social, ampliación de los servicios públicos de salud y educación. Varios

países consiguieron erradicar el analfabetismo y ampliar expresivamente la infraestructura de educación superior. Brasil creó 17 nuevas universidades públicas -y gratuitas, valga la observación, pues existen países en la región con universidades públicas pero no gratuitas, legado de la era neoliberal del siglo XX-; Ecuador tuvo uno de los programas más osados de “formación de talento humano” para “el cambio de matriz productiva” como lo establecía el segundo Plan Nacional del Bien Vivir de Rafael Correa, lo que significó el cierre de más de una decena de pequeñas universidades privadas de baja calidad educativa y la creación de cuatro universidades emblemáticas: la universidad de las artes, la universidad pedagógica, la universidad de la Amazonía Ikiam y la universidad de tecnología Yachay. Durante varios años este país tuvo el presupuesto relativo al PIB más alto para el sector educación y no establecía techo presupuestario para becas de post grado en el exterior de los estudiantes ecuatorianos.

Los hospitales públicos de calidad y bien equipados se multiplicaron por toda América Latina, atendiendo no solo a los sectores populares sino también a parte importante de la clase media. Con la participación de médicos cubanos y a partir de una visión de solidaridad y colaboración entre los países y gobiernos, se extendieron las misiones de salud pública hacia los lugares más recónditos de los andes, la Amazonía, o a las villas más alejadas de los centros poblados, allí donde los médicos nacionales no tenían interés de ir.

Mónica Bruckmann es profesora del departamento de Ciencia Política y del Programa de Posgrado de Historia Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro-UFRJ, Brasil.

Diversas y múltiples fueron las políticas sociales en toda la región, desde el “hambre cero” (*fome zero*) en Brasil hasta el “mínimo vital de agua” en la Bogotá del alcalde Petro, que establecía la gratuidad del agua potable para los más pobres de la ciudad hasta un límite de 6 mil litro por familia, por mes. En general, durante los primeros quince años del siglo XXI la región consiguió reducir expresivamente la miseria y la pobreza, ampliar los derechos sociales, democratizar el acceso a la universidad pública y gratuita, multiplicar las comunidades académicas y científicas en el contexto de un crecimiento económico sostenido a lo largo del periodo. Muchos atribuyen este proceso al llamado super ciclo del precio internacional de las materias primas que amplió las rentas nacionales de manera general. Quienes defienden estas tesis (el Banco Mundial, por ejemplo¹) olvidan que, una política redistributiva fue fundamental para obtener los resultados sociales en la región, con los beneficios de ampliación de la capacidad de consumo de grandes estratos de la población excluidas no sólo de la posibilidad de un consumo mínimo de sobrevivencia sino también del ejercicio de ciudadanía. Sin una intervención política de los gobiernos progresistas, este super ciclo habría derivado, seguramente, en una mayor concentración de riqueza en manos de las clases dominantes tradicionales en la región. De hecho, estas últimas se sintieron expropiadas de los beneficios económicos y de la riqueza que por “tradición y costumbre” les correspondía.

Las reacciones no se dejaron esperar, ya desde los primeros años del periodo que analizamos vimos intentos de golpes de Estado (2001 en Venezuela). El paro petrolero de PDVSA, que por poco asfixia al gobierno del presidente Hugo Chávez, fue una reacción extrema de la oligarquía rentista venezolana que perdió el control de la empresa petrolera del país con las mayores reservas de petróleo del mundo (actualmente Venezuela detenta el 18% de las reservas mundiales). Posteriormente, el golpe de Estado en Honduras (2009), seguido de la destitución, en menos de una semana, del

presidente Lugo en Paraguay (2012) y de la destitución por el congreso brasileño, aduciendo crimen de responsabilidad en el ejercicio del cargo, pero sin crimen comprobado, de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, inauguraron un nuevo periodo de reacción de las derechas en la región con características particulares:

1. A diferencia de los viejos golpes militares del siglo XX, se producen rupturas democráticas, estados de excepción, que rápidamente buscan legitimidad institucional y ropaje democrático. Los poderes legislativos se constituyeron en el espacio fundamental para estos procesos;
2. El uso de los poderes judiciales como instrumentos de persecución política y de intervención en los procesos electorales;
3. El despliegue de grandes complejos tecnológicos en la comunicación de redes para impactar y orientar la opinión pública con noticias parcial o totalmente falsas. Esta estrategia se combina con instrumentos tecnológicos y técnicas psicosociales;
4. La política, cuya secularización constituyó una conquista de la democracia liberal, retorna al ardid religioso y al uso de símbolos de las iglesias evangélicas, pentecostales y católicas. La cruz y las biblias recuperan el papel político que tuvieron en la Edad Media. Esto, por cierto, implica también el fortalecimiento del pensamiento dogmático y fundamentalista que se declara en lucha abierta contra el pensamiento laico, contra las ciencias sociales y la filosofía. De ahí los varios intentos, en toda América Latina, de reducir, asfixiar o simplemente decretar el cierre de los programas de ciencias sociales y humanidades. Todo espacio de producción y elaboración del pensamiento crítico debe ser combatido (véase el caso extremo del Brasil de Bolsonaro);
5. El uso de las políticas de exterminio, principalmente pero no únicamente, en las fa-

¹ Ver informe del 2012

velas y periferias urbanas y rurales, ahora legitimadas por un discurso profundamente discriminador en todos los ámbitos (racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, etc.);

6. Una capacidad de movilización social importante de las ultraderechas a partir de un discurso religioso, de valores conservadores como la familia tradicional, el sexismo, el dogma, las buenas costumbre, el orden y el progreso. Al mismo tiempo, las movilizaciones populares espontáneas u organizadas contra la agenda neoliberal, convierten a las calles y las plazas en un territorio de disputa entre dos proyectos y visiones de mundo contrapuestos.

¿Qué está en juego en América Latina en este momento?

Desde el punto de vista estratégico, como lo hemos venido sosteniendo en los últimos años, una vez más la disputa global por recursos naturales estratégicos para los ciclos tectológicos e industriales en desarrollo y emergentes en relación a los cuales América Latina tiene las principales reservas: litio (94% de las reservas mundiales, y sólo en Bolivia más de 75%), niobio (96% solo en Brasil), cobre (36% de participación mundial), la primera reserva mundial de petróleo (18% solo en Venezuela y el creciente potencial brasileño con las reservas offshore), casi 30% del agua dulce del planeta, siete de los diez países más megadiversos del mundo están en la región, solo para citar algunos ejemplos.

Estados Unidos declara en todos sus documentos estratégicos, sean de seguridad nacional o de otra índole, incluidos los planes de ciencia y tecnología, que el acceso a recursos naturales estratégicos es una cuestión de seguridad nacional. Los datos muestran que en casi todos los casos estos recursos naturales están fuera de su territorio continental y de ultramar, principalmente en América Latina y particularmente en América del Sur. Por otro lado China, desde fines de los años 90 ha venido incrementando la demanda de estos recursos, y después del refluj

jo de los precios de las materias primas, como consecuencia de la crisis del 2008, observamos una tendencia a la recuperación de los precios de estos recursos y la inminencia de un nuevo super ciclo de precios en la medida en que avanza la Nueva Ruta de la Seda: un corredor, proyecto propuesto por China en 2013 y que hoy en día incluye a más de cien países del mundo. La disputa por la hegemonía en el sistema mundial entre una China emergente y Estados Unidos en declive económico está produciendo reorganizaciones geopolíticas de gran envergadura, está reconfigurando los territorios y bloques económicos en un ambiente global de grandes tensiones y amenazas, de gran radicalidad de los proyectos neo conservadores que se resisten a los cambios de época y reaccionan con violencia creciente. Al mismo tiempo, una creciente militarización de los territorios y reposicionamiento de las bases militares de Estados Unidos en la región acompañan este proceso.

Desde el punto de vista económico, se trata de imponer a sangre y fuego el programa económico neoliberal, que algunos analistas han llamado neoliberalismo 2.0, a pesar del fracaso evidente de este proyecto implantado durante las últimas década del siglo XX. En la agenda económica están como principales prioridades: la desregulación de los derechos laborales y de jubilación, la venta de las empresas públicas con el viejo argumento de achicar el Estado, la entrega de recursos naturales por la vía de concesiones que poco o nada dejan a los Estados, la transferencia de recursos públicos al sector financiero y la recontratación de deudas públicas (véase el caso de la deuda externa creada por el gobierno de Macri en Argentina: 107 mil millones de dólares en menos de cuatro años, de la cual 98% ya salió del país), la reducción radical de inversión del Estado en servicios básicos como salud y educación, proponiendo la privatización de estos servicios (el ejemplo del programa "Future-se" del gobierno de Bolsonaro para las universidades públicas en Brasil, elaborado a partir de una consultoría al Banco Mundial, es un buen ejemplo de esta tendencia).

Evidentemente, frente a las consecuencias de este neoliberalismo 2.0, la protesta popular se

profundiza en todo el continente, a partir de un estado de ánimo de descontento e indignación creciente de la población, pero también de la pérdida acelerada de conquistas sociales y políticas de aquellos sectores que no están más dispuestos a regresar a la miseria y la indigencia, que no admiten estafas políticas ni golpes de Estado de nuevo tipo. La respuesta popular indígena frente a la renuncia obligada del presidente Evo Morales y toda la primera línea de gobierno en Bolivia es una muestra del potencial de esta movilización social, pero también es una evidencia de los niveles de violencia y racismo que las oligarquías regionales y sus aliados internacionales son capaces de desplegar.

Nos espera un 2020 de crecientes tensiones y

enfrentamientos entre estos dos proyectos políticos, económicos y civilizatorios. Sin embargo, es bueno recordar que la reacción de los sectores conservadores se hace más violenta, justamente cuando pierden legitimidad política, económica y social. El neoliberalismo 2.0 es incompatible con la propia democracia liberal, y de ella tiene que guardar respetable distancia, aun cuando pretenda mantener las apariencias. Si la protesta popular gana densidad y conducción política, estaremos, ciertamente, frente al inicio de un nuevo ciclo progresista, que exige un balance serio de los avances y limitaciones del momento anterior, pero representa también grandes desafíos y posibilidades de transformaciones más profundas y recuperación de la integración regional y soberanía de los pueblos y los gobiernos. ◀

Dossier

China-EEUU: ¿Escalada en varios frentes?



El caso de Ecuador: Imperialismo impone dictaduras de nuevo tipo

Mario Ramos

Ecuador vivió en octubre, el más grande estallido social desde el “retorno a la democracia”, año 1979, es decir, en 40 años. Ese estallido social fue detonado por la promulgación del Decreto 883 que liberaba los precios de los combustibles para que se muevan en la “lógica” de mercado internacional, y buscaba implementar otras políticas económicas profundamente neoliberales y anti-nacionales, como reformas laborales que precarizaban el trabajo, entre otros aspectos lesivos a la economía popular. Esa rebelión social tomó forma de un Paro Nacional que fue *in crescendo* en la Sierra y en sectores de la Amazonía, se transformó en levantamiento indígena y luego se convirtió en una verdadera insurrección nacional, siendo el epicentro la ciudad de Quito, por su carácter de capital de la República.

La fuerza de la furia ciudadana sorprendió a todos porque de una u otra manera el gobierno de Moreno había logrado funcionalizar para su plan de “descorreizar” el país a importantes organizaciones sociales o a sus dirigentes. Es decir, la dirigencia social se vio rebasada por las masas en rebelión. Ese relámpago revolucionario lo vivió Ecuador sin organización política popular articulada, pero trajo como resultado el trastoque total del escenario político que hasta ese momento existía y la derogatoria del Decreto 883.

Descorreizar se convirtió en una “noción” posicionada por la prensa mercenaria, como si-

Mario Ramos es director del Centro Andino de Estudios Estratégicos (CENAE), Ecuador.

nónimo de lucha contra la corrupción, lucha falsa e instrumentalizada (lawfare) para perseguir a la militancia de la Revolución Ciudadana y método escogido para neutralizar toda opción nacional-popular que haga frente al neoliberalismo. Esta descorreización ha terminado por crear una corriente “correísta” que no se explica con solo decir, seguidores de Correa, el problema es más complejo, pero no lo vamos a analizar en este momento.

A través de la impostura y discurso de la descorreización, hoy desgastado, el gobierno de Moreno logró desmontar el modelo pos neoliberal aplicado por el gobierno de Correa y frente a la aparente apatía del pueblo ecuatoriano, la oligarquía se creyó segura para seguir profundizando el festín neoliberal. En general, hasta la promulgación del Decreto 883, todo les había salido relativamente bien, como por ejemplo, el retorno de presencia militar gringa, entre otras cuestiones.

Pero la naturaleza volcánica del pueblo ecuatoriano se mostró una vez más. Lo que estaba sucediendo en realidad era acumulación de energía tectónica. Una señal clara de que la fuerza del levantamiento popular de octubre trastocó el escenario político, es que el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional, como forma de insistir en el sometimiento a las exigencias del FMI, y que para ponerlo en términos sencillos, significaba 10 o 30 Decretos 883, se archivó con los votos de diversas fuerzas políticas antagónicas entre sí. De por medio, están obviamente las aspiraciones electorales de partidos como el socialcristiano. Es decir, a pesar de que con-

taban con una favorable correlación de fuerzas para aprobar ese proyecto de ley muy nocivo para el país, este no pasó. Este nuevo fracaso del gobierno de Moreno no significa que renuncia a seguir buscando la forma de materializar sus objetivos.

Después de lo descrito, la pregunta es ¿De dónde saca fuerza y cómo se sostiene un gobierno extremadamente debilitado, que busca seguir insistiendo en la profundización de unas políticas que benefician a reducidas élites y vacían de soberanía al Estado? A nuestro modo de ver, mucho de aquello se explica o se comprende si observamos el actual contexto internacional.

Podríamos decir que prácticamente toda Nuestra América ha evolucionado a zona de disputa geoestratégica, y no solo geopolítica. Antes en nuestra historia hubo países que se habían convertido en territorios exquisitamente geoestratégicos en su momento: Cuba, Nicaragua, a causa de sus respectivas revoluciones; o el Chile de Allende, por ejemplo. Pero hoy, por lo menos, dos hechos claves convierten a nuestro subcontinente en moneda estratégica: 1) La transición hacia un nuevo 'sistema' internacional en proceso, donde varios lacayos gobernantes se conforman en ser peones de lo que acontece en el escenario internacional, hipotecando nuestro futuro ad infinitum, por su actitud servil y carente de visión estratégica, al boicotear que actuemos como región, y; 2) La agudización de las contradicciones sociales provocadas por el capitalismo financiero actual y su herramienta, el neoliberalismo.

Respecto al primer punto, las transiciones de poder en la historia de la humanidad no son nuevas, en los últimos quinientos años han sucedido dieciséis transiciones de acuerdo a Graham Allison, de las cuales doce se dirimieron con guerras; por ejemplo, las relaciones de poder mundial cambiaron al término de la Primera y Segunda Guerras Mundiales; hubo potencias que dejaron de serlo y otras que emergieron. Lo importante es identificar las variables y las tensiones que tornean el gran juego. Además, comprender las tendencias

es vital para adaptarse en términos táctico-estratégicos.

Pero hay una particularidad a resaltar en la actual transición de poder, que la dirección de esa transición es de Occidente a Oriente. El presidente francés, Emmanuel Macron, lo dijo con claridad, admite la derrota de la hegemonía occidental por haber llegado a su fin ante potencias como Rusia, y en especial China. Y es así, los nuevos centros económicos y financieros afinan acciones junto con potencias emergentes como Irán o India. En este sentido, el surgimiento de sistemas financieros alternativos es una realidad, China y Rusia con el objetivo de liberarse de la dictadura del dólar y la frecuente política estadounidense de las sanciones, han creado sus propios sistemas de pago internacionales, por ejemplo, el CIPS (siglas de China International Payments System), y el ruso SPFS (siglas de Sistema para la Transferencia de Mensajes Financieros), son mecanismos en uso creciente en el comercio bilateral, para dejar de lado al SWIFT, bajo control estadounidense.

La competencia entre EE.UU. y China se hizo pública y notoria en el actual gobierno de Trump, pero ésta inició en el gobierno de Obama. EE.UU. ha tomado conciencia de que la actual transición de poder juega en su contra, y esto explica la guerra comercial desatada por Trump y su 'política proteccionista', cuando antes EE.UU. era el adalid del 'libre comercio', rol que ahora lo quiere asumir China; una señal más de que este país está consiguiendo controlar de manera creciente los hilos económicos, financieros y comerciales del emergente sistema internacional.

En esa transición del poder mundial, como gran jugador, América Latina es prácticamente irrelevante por propia decisión de sus gobiernos, con ciertos aspectos que habría que matizar, pero que por espacio, no lo vamos a hacer. Pero Nuestra América es relevante en el marco de la competencia existente entre EE.UU. y las demás potencias que le disputan el poder a EE.UU., por ello planteamos que toda

nuestra región, se ha convertido en una zona geoestratégica. Por ello EE.UU. ha revitalizado la Doctrina Monroe con agresividad, -potencial Plan Cóndor II en vigencia-. El mismo jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, en una reciente gira a nuestra región expresó su preocupación por la influencia China en todos los “niveles de poder” en América Latina y el Caribe.

Obviamente todos los procesos de transición de poder son competitivos, por ende, conflictivos, el problema es que Nuestra América está atrapada en ese juego porque ella misma ha destruido la capacidad de moderar de alguna forma a su favor los intereses en disputa. Por ejemplo, se había creado UNASUR para patear la pelota como equipo en el escenario mundial, pero los gobiernos lacayos al servicio de la geoestrategia gringa, neutralizaron ese organismo, al menos, por el momento. Pero además de no desarrollar nuestros propios instrumentos de política internacional, se insiste en permanecer en otros, como la OEA, que justamente es la herramienta gringa para mantenernos sometidos a la política del Departamento de Estado.

Prueba de que en la competencia entre China y EE.UU. nuestra región pierde oportunidades, está el ofrecimiento de China de invertir en la zona CELAC 200 mil millones de dólares con la condición de que fuesen proyectos regionales conjuntos. Esto demuestra adicionalmente que China tiene una estrategia, no solo para América Latina y el Caribe, sino para el mundo, como lo es su proyecto de la nueva Ruta de la Seda, de grandes implicaciones geopolíticas y geoestratégicas. En cambio, lo que tiene EE.UU. para nuestra región es fuerza bruta, incrementa sus prácticas subversivas para controlar una región que ha decidido rebelarse contra un modelo que empobrece y saquea sus recursos naturales, el neoliberalismo.

El ‘lawfare’, los golpes de Estado en Honduras y Bolivia, la guerra de amplio espectro contra Venezuela, el fracaso del proceso de paz en Colombia, y otros hechos, nos indica que EE.UU. ha perdido liderazgo moral y para con-

trolar su ‘patio trasero’ ha tenido que recurrir a una estrategia más militar que política en el intento de revertir los avances democrático-populares en nuestra región.

A diferencia de China y Rusia, EE.UU. ha perdido orientación estratégica. Pruebas de que EE.UU. actúa como simple policía del mundo, es que incluso ha provocado contradicciones con sus propios aliados, por ejemplo con la Unión Europea, incluso los ha espiado, como lo denunció Snowden. Impone sanciones a un miembro de la OTAN como es Turquía por la compra de los S-400 a Rusia, y no debemos olvidar el intento de golpe de Estado contra Erdogan. Ha perdido la guerra en Siria, Irak, Yemen y Afganistán. En fin, habría más aspectos a señalar, el punto es que EE.UU. ya no tiene la fuerza de imponer sus aspiraciones ‘universalistas’. No tiene una política exterior racional, sino básicamente una estrategia militar y una actitud arrogante. Su actual crisis existencial radica en la incapacidad de poner en armonía sus aspiraciones, con sus reales capacidades.

EE.UU. promovió la democracia liberal en Nuestra América, mientras esas “democracias” obedecían a sus intereses. Hoy, en el marco de lo señalado, ya ni siquiera cuida las formas, como lo demuestra la actuación de sus autoproclamados y el regreso a los golpes clásicos de carácter militar, como es el caso de Bolivia. En política hay pocas recompensas por mitigar daños, y el daño que provoca ese comportamiento es irreversible, como lo habíamos señalado, adicionalmente al racismo que sus lacayos han demostrado en los últimos levantamientos populares equiparándose al comportamiento de los conquistadores españoles. EE.UU. ha perdido todo liderazgo moral en Nuestra América. La actuación injerencista de los EE.UU. finalmente acabará por socavar totalmente su influencia y prestigio en nuestra región.

La actual institucionalidad mundial, ya no refleja la realidad geopolítica y geoestratégica vigente, los mismos EE.UU. se han encargado

de atentar contra el derecho internacional y el orden que les favorecía. EE.UU. ha aumentado el peso de su carga moral, al violentar toda esa normativa. Se están concibiendo y surgen paulatinamente nuevas organizaciones internacionales, básicamente en Eurasia, que gravitarán definitivamente para completar la transición de poder de Occidente a Oriente. En ese marco, no nos sorprendería que desaparezca la ONU, así como desapareció en su momento la Sociedad de las Naciones, y aparezca otra organización con los países que realmente liderarán la geopolítica mundial, a la que gradualmente se vayan sumando otros países, o quizá el modelo sea grandes organizaciones regionales constituidas con base a zonas de influencia, que pueden en un momento coordinar a nivel mundial, es decir, una especie organización de organizaciones. Los mismos EE.UU. se han ido retirando del sistema de Naciones Unidas.

Para abordar el segundo punto, era necesario colocar los elementos de contexto anteriores. El capitalismo que domina hoy día es el financiero, este tipo de capitalismo arruina las economías nacionales en beneficio de unos pocos súper ricos. Lo que se busca es la inviabilidad de los Estados-Nación -el caos creativo- para convertir a los países en simples proveedores de materias primas. De ahí que, por ejemplo, en zonas de África, prácticamente gobiernan transnacionales con sus ejércitos privados, también es el caso de Colombia.

No vamos a abordar el punto de la desigualdad y la concentración, ya que existe suficiente información en la red, pero si destacar este dato de la Swiss Federal Institute of Technology, que indica que 147 empresas controlan el 40% de las acciones de 43.000 corporaciones radicadas en 116 países. De ahí que los niveles de resistencia social contra la globalización neoliberal se acrecientan en todo el mundo.

Los acontecimientos de los últimos meses y semanas en Nuestra América, no hacen más que reflejar lo antes analizado, somos una zona geoestratégica en disputa, y el imperia-

lismo yanqui se empeña por todos los medios en disciplinar geopolíticamente y sostener lo que considera su 'patio trasero', para al menos en el futuro mantenerse como potencia económica, ya que hegemón mundial dejará de serlo en pocos años.

Ahora, si bien tenemos denominadores comunes en Nuestra América, cada uno de nuestros países tiene su particular realidad. Lo que acontece en el caso ecuatoriano, se explica en primer lugar por graves errores de tipo estratégico en la conducción de lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esto nos lleva a proponer que los vigentes o nuevos procesos revolucionarios o nacional-populares deben desarrollar un tipo de instrumento político más integral que contemple secciones especializadas de procesamiento de información y análisis estratégico, expertos para enfrentar la guerra psicológica, el "lawfare", etcétera, es decir, conformarse como organizaciones más sofisticadas para enfrentar justamente la muy sofisticada estrategia imperialista, que busca perpetuar su dominio en nuestra región. Además es necesario plantearse la creación de democracias populares para superar la caduca democracia liberal-burguesa.

Titulamos el artículo de esa manera, porque el gobierno que Moreno ha impuesto, es prácticamente una dictadura de nuevo tipo, la institucionalidad democrática ha sido destruida, no hay estado de derecho, y a pesar de su casi nula credibilidad y apoyo popular, se sostiene gracias a la férrea unidad de los poderes fácticos, que han soslayado sus propias contradicciones secundarias. En este sentido, el objetivo básico del gobierno de Moreno/Nebot/Lasso/Bucaram ha sido destruir lo que llaman el correísmo e insertar de nuevo al Ecuador en la globalización neoliberal y su capitalismo financiero, de ahí el regreso del FMI y toda la política económica implementada que básicamente favorece al sector bancario-financiero globalizado y a grandes transnacionales y grupos económicos. ☞

16 de noviembre de 2019

La crisis de Haití: punto de bifurcación y no retorno

Lautaro Rivara

La crisis en Haití es la más extensa, la más radical, y con certeza la más desconocida de todas las que atraviesan la actual coyuntura latinoamericana y caribeña¹. Su origen reconoce varias causas y temporalidades. En este artículo nos centraremos tan sólo en las de mediano y corto plazo, dejando de lado por el momento la dimensión de largo aliento, vinculada al quiebre de un modelo neocolonial de dominación instaurado con la ocupación militar norteamericana de 1915-1934, continuado luego con la tutela de gobiernos civiles y militares post-ocupación, y finalmente rematado con la dictadura vitalicia de François y Jean-Claude Duvalier hasta su caída en 1986².

Sostenemos que desde julio del año pasado Haití vive un estado de insurrección popular permanente³ que se prolonga en el tiempo en una dinámica de picos de movilización masiva

1 Hemos desarrollado, con Gonzalo Armúa, un análisis panorámico de la coyuntura regional. Disponible en: <https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/10/09/nuestra-america-tres-tiempos-acontecimientos-analisis-coyuntura-regional-global/>

2 Véase: Castor, Suzy (1971). La ocupación norteamericana de Haití y sus consecuencias. Siglo Veintiuno Editores. O consúltese también: Soukar, Michel (ed) (2015). Cent ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti. C3 Editions: Delmas.

3 Para un análisis de la coyuntura de julio y de la formación social haitiana véase el dossier n° 8 del Instituto Tricontinental: "La insurrección popular haitiana y la nueva frontera imperial". Disponible en: <https://www.thetricontinental.org/es/la-insurreccion-popular-haitiana-y-la-nueva-frontera-imperial/>

Lautaro Rivara es sociólogo y doctorando en Historia. Periodista. Brigadista internacional de ALBA Movimientos en Haití.

y períodos de amesetamiento que se suceden. Conforme la crisis se agrava, los períodos de tregua social son cada vez más breves e inestables, y los picos de movilización cada vez más convulsivos. Desde el estallido de julio del 2018, tres fueron los grandes catalizadores de las protestas:

1. La tentativa del gobierno, en sintonía con las políticas globales del FMI en la materia⁴, de aumentar el precio de los combustibles hasta un 51%, con el consecuente impacto que esto tendría en el precio del transporte, la alimentación y la carestía de la vida en general. Como respuesta, del 6 al 8 de julio del 2018 cerca de un millón y medio de personas tomaron las calles del país, forzaron la revocatoria de la medida, obtuvieron la dimisión del entonces Primer Ministro Jack Guy Lafontant y lograron acuartelar a las fuerzas de seguridad, que fueron completamente rebasadas por los acontecimientos. La estela de esta coyuntura perduraría largos meses.
2. El develamiento de uno de los escándalos de corrupción más importantes de la historia del país, por el que la clase política, y en particular el presidente y el partido de gobierno, participaron en el desfalco de al menos 2 mil millones de dólares de los acuerdos de cooperación energética de Petrocaribe⁵ (monto equivalente a casi un cuarto del PBI haitiano). Este fue el eje

4 Decimos globales, porque idénticas políticas impulsó el FMI en países tan diversos como Ecuador, Haití, Egipto o Guinea Ecuatorial.

5 El desfalco fue corroborado por sucesivos informes presentados por la comisión anti-corrupción del Senado y por el propio Tribunal Superior de Cuentas.

rector de las protestas desde septiembre del año pasado hasta marzo del presente, con un importante protagonismo de jóvenes auto-organizados desde las redes sociales, llamados *petrochallengers*.

3. La crisis energética desatada en septiembre de este año fue el último eje aglutinante. Ésta fue en parte producto de las especulaciones del gobierno que, reteniendo stock de combustibles, intentaba justificar la eliminación del subsidio como condición para seguir costeadando el precio de las importaciones. Pero aún más determinante fue la virtual salida de Haití de Petrocaribe. Esto se produjo porque el bloqueo que Estados Unidos sostiene sobre Venezuela impide el arribo a costas haitianas de los cargueros que deberían transportar el combustible. Pero también por el hecho de que en un giro brusco de su política exterior, Haití decidió retirar su reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Fue así que el país, completamente alineado con la geopolítica guerrerrista de los Estados Unidos, empezó a operar en contra de la Revolución Bolivariana en espacios regionales como la OEA y la CARICOM, llegando al extremo de ser la única nación de este espacio en votar en favor de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La crisis energética, sumada a un cóctel explosivo de alta inflación, devaluación de la moneda y congelamiento salarial, terminó de deteriorar las de por sí calamitosas condiciones de vida de las cuatro quintas partes de la población haitiana. Algunas de sus consecuencias han sido la práctica paralización del transporte por períodos prolongados; la crisis de la economía agrícola campesina, impedido como está el sector de comercializar su producción; el consecuente aumento del precio de los alimentos en las grandes ciudades del país; la interrupción de la actividad escolar y el funcionamiento intermitente de los centros de salud; el cierre de fábricas y comercios de pequeño y gran porte; el agravamiento del flagelo del hambre, sobre todo en las regiones

más aisladas y dependientes de asistencia alimentaria; y un largo etcétera.

Como respuesta, las clases populares y sus organizaciones rurales y urbanas se lanzaron a las calles del país aglutinadas tras la demanda de la dimisión inmediata del presidente Jovenel Moïse, sindicado como principal responsable de la crisis. Pero pronto la agenda de reivindicaciones iría escalando, conforme ganaba pregnancia un discurso de impugnación ya no sólo del elenco gubernamental, sino de la totalidad del sistema económico y político: *fòk sa chanje*, (“es preciso que esto cambie”), *chavire chodyè a* (“darlo vuelta todo”) o *nou ta dwe viv tankou moun* (deberíamos vivir como personas), han sido algunas de las consignas en la lengua nacional haitiana que expresan el alcance y el sentido de las reivindicaciones populares.

El gobierno adoptó diferentes estrategias para aferrarse al poder y garantizar la continuidad de los privilegios de una “repugnante élite”, tal y como un literato haitiano bautizó a la burguesía y la oligarquía que han desangrado al país desde la clausura de la gesta revolucionaria de 1804. La primera estrategia fue el mutismo, que llevó a que el presidente pasara cerca de un mes sin dirigirse a la nación en medio del descalabro energético y social generalizado. Luego comenzaron a producirse diferentes convocatorias al diálogo que fracasaron sucesivamente, conforme los diferentes actores políticos tomaban distancia de un barco que evidentemente se iba a pique. Luego, como es de prever, comenzó a desplegarse la represión lisa y llana de las manifestaciones en un intento infructuoso por recuperar el control del territorio, en particular de la zona metropolitana de la capital Puerto Príncipe, convertida para entonces en un verdadero polvorín. Como constataron la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional (éstas últimas con resonantes demoras), el saldo de la represión ha sido luctuoso: uso excesivo de la fuerza, torturas, detenciones arbitrarias, al menos 42 muertos en las últimas semanas y 77 en lo que va del año.

Por la probada ineficacia y debilidad de la Policía Nacional, y considerando que Haití no puede emular a sus pares ecuatorianos, bolivianos o chilenos sacando el ejército a las calles⁶, la respuesta que comenzó a imponerse fue la paramilitarización, tal y como ha sucedido en todos los regímenes neoliberales maduros. Además, cabe recordar que las dos últimas misiones de ocupación de la ONU, la MINUSTAH y la MINUJUSTH, han finalizado la retirada de los contingentes policiales y militares extranjeros, cediendo paso a la BINUH, una misión de carácter más bien “político”. Varios hechos constatan esta tendencia a la paramilitarización: el estímulo a grupos criminales organizados que responden directamente al poder político⁷, la perpetración de sendas masacres en algunas comunidades rurales o en los barrios populares más activos y movilizados⁸, y, por último, la infiltración constante de mercenarios y ex militares norteamericanos en un proporción incierta. A comienzos de febrero, y de nuevo hace pocos días, algunos de estos contratistas fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Toussaint L’Ouverture cargando armas de grueso calibre, municiones y equipos avanzados de telecomunicaciones.

En el frente internacional, la respuesta de las grandes corporaciones occidentales de prensa ha sido la esperada: la invisibilización más rotunda de la situación haitiana siempre que fuera posible, y cuando las dimensiones de la crisis se volvieron inocultables, su tergiversación total. Así se ha negado el carácter pacífico de la mayoría de las protestas, se ha ocultado la existencia de planes alternativos de gobierno, así como de liderazgos y fuerzas sociales organizadas, y se ha soslayado la evidente responsabilidad de la llamada “comunidad internacional” en la crisis haitiana,

6 Porque éste fue disuelto durante el segundo gobierno del cura salesiano Jean-Bertrand Aristide en el año 1995.

7 Anel Joseph, jefe de los gánsteres de Grand-Ravine que asoló las poblaciones rurales del interior durante meses, ha sido quizás el caso más emblemático de connivencia político-criminal.

8 Podemos mencionar los casos de Bel-Air, La Saline, Tokyo, Carrefour-Feuilles y tantos otros.

como si esta fuera una especie de fatalidad atávica⁹. Es de rutina señalar unilateralmente los elementos de violencia, desesperación y espontaneidad en una nación siempre leída desde clivajes racistas y coloniales. En esto también han contribuido las ONGs internacionales, con la difusión de ideologías desarrollistas y concepciones desmovilizadoras¹⁰.

Por otra parte, la injerencia de los Estados Unidos¹¹, último y determinante factor de poder que aún se reserva el derecho de tutela, así como el de otras potencias occidentales de menor cuantía, ha sido constante. Al principio esta injerencia fue tercerizada a través de organismos regionales como la OEA, de instituciones financieras multilaterales como el FMI o de agrupamientos de interés *ad hoc* como el llamado *Core Group*¹² que nunca dejaron de sostener tácita o explícitamente la continuidad en el poder de Jovenel Moïse. Pero en las últimas semanas ha sido la embajada en Puerto Príncipe y el Departamento de Estado norteamericano los que han tomado públicamente cartas en el asunto, visiblemente exasperados por la dilatación de una crisis que

9 Para un análisis detallado, véase el lúcido texto de Ricardo Seitenfus, ex representante de la OEA en Haití. Seitenfus, Ricardo (2016). Reconstruir Haití: entre la esperanza y el tridente imperial. CLACSO y Fundación Juan Bosch. Y también: Seitenfus, Ricardo (2018). Les Nations Unies et le choléra en Haïti. C3 Editions: Delmas.

10 Sobre el rol de las ONGs locales e internacionales en Haití recomendamos la obra del profesor Jean Anil Louis-Juste, quién fuera asesinado por su activismo político el 12 de enero del 2010, el mismo día del terremoto que devastó al país.

11 Para profundizar sobre el lugar de Haití en la geopolítica del Caribe hicimos esta entrevista a Camille Chalmers, intelectual y dirigente de ALBA Movimientos. Disponible en: <https://www.telesurtv.net/opinion/El-imperialismo-norteamericano-se-vale-de-Haiti-para-sabotear-la-unidad-regional-entrevista-a-Camille-Chalmers-20191011-0011.html>

12 Se trata del autodenominado grupo de “amigos de Haití”, conformado por representantes de la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, y las embajadas de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos y Francia, actualmente divididos en su posición sobre la crisis haitiana, pero alineados bajo la hegemonía estadounidense.

empieza ya a afectar las utilidades de sus empresas trasnacionales.

Del otro lado, el campo de la oposición se ha configurado en sendas coaliciones, desde el Foro Patriótico, espacio representativo de las movilizaciones de calle y los movimientos sociales del campo y de la ciudad ¹³, hasta espacios conservadores representativos de diferentes fracciones de la oligarquía, la burguesía local y la pequeña burguesía reaccionaria, tales como la Alternativa Consensual, la Pasarela o el Bloque Democrático. Recientemente estas y otras coaliciones han firmado una serie de puntos programáticos para facilitar la construcción de un gobierno de transición tras la eventual dimisión del presidente. Sin embargo, el carácter espontáneo de las movilizaciones las vuelve relativamente independientes de la oposición organizada. En particular de los partidos tradicionales que son considerados como parte del problema por las grandes mayorías populares.

Todos los factores señalados, a saber, la continuidad con síntomas de desgaste de la movilización popular; el acuerdo suscripto por prácticamente toda la oposición social, política y parlamentaria; la promoción de los Estados Unidos de una salida negociada con el propio partido de gobierno; la candente actualidad geopolítica del Caribe y el rol que allí juega Haití; y el colapso objetivo del modelo extrovertido y subdesarrollante que sufre la nación más empobrecida y desigual del hemisferio, nos hacen prever dos grandes salidas posibles para la crisis, en lo que constituye ya un claro punto de bifurcación. Todas las variables sociales, políticas y económicas se encuentran en estado acelerado de descomposición. El actual equilibrio inestable que ha sobrellevado el país desde julio del año pasado es ya insostenible, por lo que en un lapso breve la situación podría evolucionar hacia:

13 Su programa completo, llamado la “Declaración de Papaye” puede consultarse en: <http://www.cloc-viacampesina.net/noticias/resoluciones-del-foro-patriotico-en-haiti-resolucion-de-papaye>

1. Una solución regresiva, es decir, la continuidad del gobierno de Jovenel Moïse en el corto plazo, a través de un acuerdo con la oposición más conservadora facilitado por los Estados Unidos, prometiendo a cambio la realización de elecciones anticipadas y la posibilidad de introducir enmiendas a la Constitución. Esta solución presupone, ante la imposibilidad de generar consensos, el recrudescimiento de la solución policial, militar o paramilitar, así como la derrota frontal de la movilización popular por recurso a la violencia o a las políticas de shock económico. El plano inclinado de la realidad haitiana llevaría a las grandes mayorías hacia un umbral de dolor y desigualdad aún mayor que el que conocemos. Sin embargo, son evidentes las dificultades del sistema para desmovilizar al pueblo haitiano y estabilizar los regímenes de dominación.
2. Una solución progresiva, que podría ser institucional, a través de la construcción de una Conferencia Nacional Soberana y de un gobierno de transición, en el que las fuerzas populares organizadas disputen su hegemonía a la clase política tradicional, incidiendo a través de la continuidad de la movilización callejera. Otros puntos ya consensuados serían el juicio a los responsables del desfalco de Petrocaribe y de las masacres mencionadas, la reforma político-electoral, y la convocatoria a elecciones limpias y a una Constituyente en un plazo de aproximadamente tres años. O bien, en una subvariante, una solución progresiva pero de tipo insurreccional, que pueda tomar por asalto un Estado por demás débil e inoperante. Este proceso, por ahora inmaduro, demandaría un acelerado trabajo subjetivo y organizativo de parte las fuerzas populares, así como la intermediación de potencias rivales en el escenario geopolítico regional, como salvaguarda de márgenes mínimos de autonomía en la consecución de un eventual gobierno popular. ⏪

Insurrección en Chile: Asamblea Constituyente libre y soberana

Silvia Arana

“Cabros, esto no prendió”

La frase la dijo el 16 de octubre pasado Clemente Pérez, expresidente del directorio del Metro de Santiago durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Era el tercer día consecutivo en que estudiantes secundarios evadían los torniquetes de entrada al tren subterráneo en protesta por el alza de 30\$ del pasaje. Pérez dijo: “Llama la atención porque es novedoso, pero es marginal... Me parece tonto... Cuando uno hace una protesta busca generar el apoyo de la población. Estos estudiantes lo que hacen es generar rechazo... Cabros, esto no prendió...”.

La miopía política de Pérez -empresario, académico y exdirector del diario La Hora- es muy representativa del llamado sentido común neoliberal, según el cual los servicios públicos como el transporte, al igual que la educación, la salud, la vivienda, el agua y los demás recursos naturales no son derechos sociales sino mercancías.

Fue justamente esta acción estudiantil la chispa que prendió la protesta masiva que ya lleva más de un mes. A los estudiantes se sumaron los movimientos feministas, sindicalistas, ambientalistas que masivamente tomaron las calles para denunciar la exclusión económica

Silvia Arana es traductora, editora y periodista de medios alternativos. Miembro del Consejo Editorial del diario digital Rebelión.

y social imperante desde hace 46 años.

Cifras de la desigualdad económica en Chile

1. Chile es el séptimo país más desigual del mundo (índice de Gini).
2. El 1% más rico posee el 26,5% del ingreso nacional; el 50% de los hogares menos favorecidos solo tiene 2,1% de la riqueza neta del país; el 10% más rico concentra el 66,5% (Cepal).
3. Chile tiene el 35% del cobre mundial. El cobre representa más del 60% del total de exportaciones. El 70% de la explotación del cobre está manejada por empresas privadas extranjeras. Sus ganancias equivalen al 17% del PIB y al 75% del presupuesto nacional (“La desnacionalización del cobre, que había nacionalizado Salvador Allende”, de Caputo y Garcés).
4. Desde la dictadura, la participación del salario en el PIB es menor al 40%.
5. El sueldo de un parlamentario equivale a 31 salarios mínimos.
6. La deuda de los hogares chilenos equivale al 74% de sus ingresos.
7. La mitad de los jubilados chilenos cobra menos de 200 dólares.
8. Las Administradoras de Fondos de Pensio-

nes (AFP) incrementaron sus ganancias en un 70% en 2019. Las seis empresas privadas del sistema AFP ganaron 849 millones de dólares invirtiendo el dinero de los jubilados.

9. Es el segundo país de la OCDE con aranceles universitarios más altos: 7654 dólares cuesta la matrícula en universidades públicas.
10. La mitad de los trabajadores tiene un salario de 480 dólares; el costo del pasaje del metro es 1 dólar.

Romper el espejo neoliberal

David Harvey sugiere: ¿Y si cada modo dominante de producción, con su configuración política particular, genera un modo de oposición que es como su propia imagen en el espejo? Sostiene que la reorganización del proceso de producción y el giro hacia la acumulación flexible del neoliberalismo han producido una izquierda que es, en muchos sentidos, su imagen reflejada en el espejo: autónoma, descentralizada y no-jerárquica. Dice que, por supuesto, hay maneras de organización que proponen romper el espejo y generar algo nuevo. La resistencia al neoliberalismo se ha construido en base al descontento que cada vez más gira alrededor de las luchas por las políticas que moldean la vida diaria en la ciudad. Harvey reconoce la importancia de la lucha de los sindicatos en la resistencia al capitalismo y al neoliberalismo, pero resalta el rol dominante de las luchas por las condiciones de la vida diaria (transporte, educación, salud, vivienda) en los últimos 15 años alrededor del mundo, de Estambul a Brasilia, a Londres, a París...

Es este el contexto que me parece apropiado para enmarcar la rebelión de Santiago en particular y de Chile en general. Las luchas para mejorar la calidad de vida y exigir mayor participación ciudadana aglutinan a diversos sectores sociales. Los protagonistas de la resistencia chilena contra el neoliberalismo y capitalismo son los movimientos sociales de

estudiantes, mujeres, indígenas, ecologistas, acompañados por trabajadores y sindicalistas.

Cae el modelo fraguado en Washington para toda América Latina

El golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 fue planeado por el gobierno de EE.UU. desde el mismo momento en que el candidato socialista ganó las elecciones presidenciales de Chile.

A partir del golpe se implementa una política neoliberal de apertura indiscriminada del mercado local en beneficio de las corporaciones multinacionales que promueven la globalización reforzando una economía productora de materias primas. Esta estructura socio-económica excluyente de las grandes mayorías es controlada por los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, FMI, OMC), promovida por los medios de comunicación corporativos e impuesta a sangre y fuego por las fuerzas represivas. El modelo socio-económico pinochetista, incluyendo su Constitución, fue mantenido por los siguientes gobiernos bajo un sistema bipartidista cuidadosamente controlado.

Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas se ha construido una resistencia multisectorial con varias puntas de lanza: el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, el movimiento indígena mapuche en el sur. El descontento social hizo eclosión en octubre pasado con una gigantesca movilización de diversos sectores populares capturando la atención de toda América Latina y dejando boquiabiertos a muchos, sobre todo a la derecha promotora del modelo chileno en la región.

El gobierno de Piñera respondió declarando la guerra a las movilizaciones sociales, usando a los carabineros para reprimir con una saña heredada de la dictadura a todo el que estuviera en la calle. Se estima que hay cerca de 250 personas, en su mayoría jóvenes, que han perdido la vista en un ojo o en ambos por disparos de los carabineros dirigidos a la cara de

las víctimas. Señala Pablo Abufom del Movimiento de Solidaridad que esto es un símbolo de la crueldad de la represión: “Decíamos que habíamos despertado, que habíamos abierto los ojos, ¡y nos dejan ciegos!”.

Durante el mes de movilizaciones populares, se produjo el paro general del 12 de noviembre convocado por los movimientos sociales que contó con la participación de la Unidad Sindical, la Unión Portuaria de Chile, los sindicatos de la Gran Minería, la Confederación de la Construcción y los trabajadores de la Empresa Nacional de Petróleos. Los gremios rompieron la abulia sindical en la que estuvieron sumergidos durante varias décadas.

El gobierno de Piñera, ante el fracaso de la represión para desarticular el movimiento social, ha dado pequeños pasos atrás cambiando de gabinete y haciendo promesas de que se redactará una nueva Constitución, pero manteniendo el régimen de las instituciones causantes de la crisis social con el apoyo de los partidos de la Concertación y de la Nueva Mayoría y de algunos sectores del Frente Amplio. Por el contrario, los movimientos sociales - junto al PC, sindicatos de docentes y otros - han rechazado el “pacto social” propuesto por Piñera, demandando su renuncia, la libertad de los miles de detenidos políticos, el juicio a los responsables de muertes, heridos y demás violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y demandando ¡Asamblea Constituyente libre y soberana!

El periodista chileno Paul Walder plantea que los movimientos sociales y la Unidad Sindical luchan contra una paradoja, un presidente que solo cuenta con el 13% de respaldo ciudadano, pero tiene el apoyo de los otros poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y policiales, las iglesias y el poder económico en primer lugar “para alargar las negociaciones en espera del desgaste del movimiento social”.

No podemos anticipar si se producirá un desgaste social, pero sí podemos prever que el movimiento de estudiantes secundarios, la

chispa de la insurrección, continuará marcando el camino. Víctor Chanfreau, vocero de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) en respuesta al pacto de Piñera con los partidos institucionales dijo: “La institucionalidad está totalmente viciada. Se sentaron a negociar sobre la sangre de nuestros muertos, no se habló de los presos políticos, no se habló del juicio de castigo desde Piñera para abajo, no se habló de la reparación a las víctimas, ni tampoco de las reivindicaciones inmediatas... Tenemos claro quiénes son... ¡Qué les van a importar los pobladores si a ellos nunca les ha faltado el techo! Son ellos los que han administrado este país durante los últimos 46 años; no tienen legitimidad; han cimentado las condiciones para que el pueblo se endeude para comer; para que la gente se muera esperando atención médica o se suicide porque no le alcanza la pensión... No vamos a permitir que los mismos de siempre traicionen al pueblo que en las últimas cuatro semanas se ha levantado dejando en claro cuáles son nuestras demandas... Son los mismos que nos están amenazando con la ley de seguridad del Estado, pero en versión Frente Amplio. Si en el 2011 vendieron a los estudiantes, hoy en el 2019 quieren vender al conjunto del pueblo. Llamamos a todas las organizaciones sociales, al pueblo anticapitalista, a las asambleas territoriales, a Unidad Social, al conjunto del pueblo a rechazar este acuerdo. El llamado es volver a los inicios de esta movilización, vamos a evadir¹ durante todo el día para llegar a la Plaza de la Dignidad a decir fuerte y claro ¡Chile no se vende!”.

Antes de octubre, decir “modelo chileno” era decir neoliberalismo y exclusión social sin rebelión. Hoy, el mito del Chile neoliberal y sumiso ha rodado por el suelo, como la cabeza de la estatua del militar Dagoberto Godoy arrancada por manifestantes mapuches en Temuco y puesta en la mano de la estatua del toqui Caupolicán, líder de la resistencia contra los conquistadores españoles. <

1 Evadir es la acción de protesta de saltar los torquetos de acceso al metro de Santiago.

Colombia entre la democratización y el tradicionalismo

Pedro Santana Rodríguez

Las más significativas transformaciones en la vida política y económica del país en el siglo XX arrancan con la puesta en marcha del proceso de democratización y descentralización aprobado por el Congreso de la República con la reforma constitucional del año de 1986 que puso en marcha la elección popular de los alcaldes municipales con lo cual se asestó un golpe mortal a la centenaria y oligárquica constitución centralista de 1886. La primera elección popular de los mandatarios locales se hizo el 13 de marzo de 1988. Instaurada la soberanía popular al tiempo que arreció la violencia política y la violencia de los carteles de las mafias, principalmente la violencia desencadenada por el cartel de Medellín así como los grupos paramilitares aliados del narcotráfico, pero, con una fuerte presencia en sectores del propio Estado y principalmente en el seno de las Fuerzas Armadas y de Policía.

En un año fueron asesinados tres candidatos presidenciales lo que provocó una movilización nacional encabezada por los jóvenes que desemboca en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que aprueba una nueva constitución política en 1991. Una carta que en lo fundamental profundiza la democracia participativa, la descentralización con la consagración de la elección popular de los gobernadores, el mandato programático, la revocatoria del mandato así como múltiples

mecanismos de participación ciudadana. El hilo de Ariadna de la Constitución política de 1991 es sin duda la participación ciudadana y la carta de los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos y colombianas.

Pero al mismo tiempo que se ponía en marcha el proceso de democratización de las estructuras del Estado entra en vigor el modelo neoliberal que arranca paralelo a la nueva constitución política. Se pone en marcha el proceso de internacionalización de la economía, y el desmantelamiento del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones. El aparato industrial es desmantelado, se inicia la privatización de servicios públicos esenciales como las pensiones y la salud, Ley 100 de 1993, así como la venta de activos productivos del Estado que no ha cesado desde entonces. En el sector agropecuario se privilegia el desarrollo y estímulo de la agroindustria por la vía del fortalecimiento de la gran propiedad terrateniente. La concentración de la renta y de la propiedad agropecuaria se aceleran desde entonces trayendo como resultado que Colombia es uno de los países más inequitativos a nivel mundial. La concentración de la propiedad medida por el coeficiente de Gini se mantiene en 0.56% y en materia de propiedad rural alcanza el 0.89% en donde 1 sería que toda la tierra estuviera en manos de un solo propietario. Hoy 2.500 propietarios son dueños del 52% del total de la tierra productiva del país.

Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur, Colombia.

El proceso de implantación del modelo neoliberal trajo consigo reformas regresivas en

materia laboral bajo leyes que implantaron lo que eufemísticamente se denomina como flexibilización laboral con la pérdida de derechos y la precarización del trabajo que trajo consigo una drástica disminución de las rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. Todo ello en medio de una alta informalidad laboral que siempre ha caracterizado el mercado laboral colombiano. Hoy de cada 100 trabajadores 60 se encuentran en el sector informal con muy bajas remuneraciones y poca productividad del trabajo que se profundizó con la reprimarización de la economía. Como se sabe, los sectores privilegiados son las industrias extractivistas de nuestros recursos naturales que son intensivas en capital y generan muy poco empleo.

Estas reformas promercado han contado con una resistencia activa de los movimientos sociales. Los paros y las movilizaciones populares han impedido que el modelo se haya profundizado como sucedió en Chile, por ejemplo. Producto de esas resistencias en materia de pensiones, por ejemplo, han logrado que se mantenga un sistema dual. Existe un régimen público de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional que mantiene un sistema de prima media que con el correr de los años se ha venido fortaleciendo en contra del sistema privado de pensiones basado en el ahorro individual que además está fuertemente monopolizado. Dos fondos privados de pensiones tienen el 85% del total de los afiliados al sistema de ahorro individual. Precisamente el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 tuvo como una de sus banderas de movilización el rechazo a la reforma pensional que pretende acabar con el sistema dual y establecer un solo sistema basado en el ahorro individual tal como el fracasado modelo chileno que ha provocado, entre otras reivindicaciones, las formidables movilizaciones que iniciadas a mediados de octubre aún se mantienen en dicho país.

Parte del proyecto neoliberal del actual presidente, Iván Duque, y de su coalición de gobierno, partidos Centro Democrático, Conservador y los grupos cristianos Mira y Colombia

Justa y Libres, buscan en esta coyuntura la profundización de la privatización de las pensiones, y más reformas regresivas en materia laboral como el contrato laboral por horas, semanas y meses, el pago del 75% del salario mínimo a los trabajadores jóvenes de menos de 28 años o a mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años. Este proyecto fue presentado por la bancada del Gobierno encabezada por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. El argumento es el mismo que se ha utilizado en todas partes: para ganar competitividad es necesario reducir las remuneraciones de los trabajadores y al mismo tiempo rebajar los impuestos a los ricos y a las empresas multinacionales que se quieran radicar en el país. El gobierno ha salido a decir que no ha presentado ningún proyecto pero la radicación del proyecto por la coalición de gobierno resta cualquier credibilidad a Duque. Este fue el segundo motivo esgrimido por los convocantes al paro dentro de los cuales están las tres centrales sindicales, las organizaciones campesinas agrupadas en la Mesa de Unidad Agraria, las organizaciones indígenas y afrocolombianas y las organizaciones comunales y estudiantiles.

Un tercer núcleo del conflicto está relacionado con la problemática agraria. Un tema central tiene que ver con la democratización de la propiedad que como ya indicamos está fuertemente concentrada en pocas manos y que se profundizó con el despojo violento. Entre 1986 y el año 2015 se habían arrebatado violentamente un poco más de 7.1 millones de hectáreas principalmente a pequeños y medianos propietarios rurales. La ley de víctimas reconoció este despojo, Ley 1448 de 2011, que busca la restitución de tierras a los desplazados y desposeídos. A la jurisdicción agraria creada se presentaron unas 121 mil reclamaciones que buscaban la restitución de 5.3 millones de hectáreas. Del total de las solicitudes fueron aceptadas y pasaron a los jueces el 52% de estas reclamaciones. Hasta ahora solo se han restituido cerca de 400 mil hectáreas y los jueces tienen en sus manos procesos que buscan la restitución de 1.4 millones de hectáreas adicionales.

Uno de los puntos esenciales de los acuerdos de Paz firmados por el Estado con la guerrilla de las FARC-EP fue el reconocimiento de la necesidad de realizar una reforma agraria integral que contempla tres puntos esenciales. Primero la creación de un fondo de tierras para la paz que debería en un lapso de 12 años repartir de forma gratuita 3 millones de hectáreas entre víctimas, campesinos sin tierra y campesinos cultivadores de coca y amapola que deberían ser los directos beneficiarios de este reparto. Un segundo tema: la formalización de la pequeña y mediana propiedad para campesinos que no tienen títulos de propiedad.

En Colombia, el 60% de los predios rurales no tienen adecuados títulos de propiedad. El acuerdo estableció que en un lapso de 12 años se deberían formalizar 10 millones de hectáreas. Y un tercer punto tiene que ver con el establecimiento de un catastro multipropósito para que las propiedades rurales debidamente formalizadas en sus títulos de propiedad paguen el impuesto predial. De los tres puntos solo este último ha tenido avances durante los 14 meses de este gobierno. Los dos primeros no han tenido ningún desarrollo y fueron la principal reivindicación de las organizaciones agrarias, indígenas y afrocolombianas en el reciente paro nacional. Por supuesto que al lado de la reforma agraria integral y la sustitución voluntaria de cultivos también se levantó la reivindicación de apoyo a las economías campesinas con políticas públicas que las beneficien. Hoy esas políticas de crédito, asistencia técnica, mercadeo, no existen. Son estas las realidades sociales que levantan los movimientos populares hoy en Colombia y es el pulso que se libra desde el campo de los movimientos sociales en contra del bloque neoliberal dominante.

La crisis política

Finalmente habría que destacar dos asuntos que marcan la coyuntura política. A la aprobación de la constitución de 1991 vino un movimiento de reacción de las fuerzas tradicionales que se han resistido a la democratización y modernización del país. Se organizaron resistencias armadas desde las regiones en las cuales participaron clanes políticos y terratenientes extendiendo la organización de las autodefensas y grupos paramilitares. Estos grupos permearon y corrompieron el proceso de descentralización. Desde 1991 lograron una importante fuerza no solo en las regiones sino que llegaron a tener el 36% del Congreso de la República. Las élites dominantes se han aliado con estas fuerzas regionales. La reacción de las fuerzas democráticas en el terreno político ha sido lenta pero tuvo un momento estelar en las elecciones presidenciales de 2018 en que Gustavo Petro como candidato de izquierda logró el 44% de los votos, un poco más de 8 millones. Este avance se ratificó este 27 de octubre en las elecciones regionales, en que candidaturas del centro izquierda y candidaturas independientes ganaron en las principales ciudades del país derrotando por primera vez a las fuerzas tradicionalistas coaligadas y propiciando una derrota al partido del expresidente Uribe, el Centro Democrático.

Todas estas fuerzas sociales y políticas han confluído tanto en el terreno político como ahora en la convocatoria a la movilización social. Está claro que la ofensiva neoliberal solo podrá ser detenida y revertida si se mantiene la movilización social y si se avanza en la concreción de un fuerte bloque de centro izquierda de cara a las elecciones presidenciales del año 2022. <

Bogotá, 20 de noviembre de 2019

Perú en tiempo de plagas y retardos

Hugo Cabieses

Parafraseando el título de la reciente novela de Mario Vargas Llosa referida a la golpeada Guatemala de 1953-54, mientras que América del Sur, en particular Bolivia se encuentra en “Tiempos Recios”¹, el Perú está en tiempo retardado en medio de demasiadas plagas². El golpe cívico, policial y militar contra el gobierno constitucional del Presidente Evo Morales, quien acababa de ganar las elecciones del 20 de octubre, con 45% de los votos, nos remite a escenas que creíamos pasadas. Vargas Llosa relata al final de su novela que visitó en Washington a la protagonista principal del golpe de la CIA contra Arbenz y escribe: “*Los tres coincidimos³ en que fue una gran torpeza de Estados Unidos preparar ese golpe militar contra Arbenz poniendo de testaferro al coronel Castillo Armas a la cabeza de la conspiración.* El triunfo que obtuvieron fue pasajero, inútil y contraproducente. Hizo recrudescer el antinorteamericanismo en toda América Latina y fortaleció a los partidos marxistas, trotskistas y fidelistas”⁴.

Al parecer, todavía no es la hora de los incendios y saqueos en el Perú, como “efecto dominó” de lo que sucede en los países vecinos, pero sobre todo a consecuencia de las plagas de corrupción, discriminación, desinstitucionalización, autoritarismo, violencias de todo tipo y adicción al fracaso que arrastra el Perú desde hace al menos tres décadas. Mi reflexión es que, nos guste o no, el presidente Vizcarra ha encontrado la forma de gobernar la **crisis de régimen político**, retardando una **crisis de estado**, es decir de colapso total con movilizaciones ciudadanas multitudinarias que deberían llevar desde el **proceso destituyente** actual hacia uno **constituyente**.

Su fórmula ha sido hablar y actuar contra la corrupción que corroe prácticamente toda la institucionalidad política, económica y social del país en todo el territorio nacional. Y lo hace sin tocar el “modelo” económico en piloto automático y cuando la reforma política que prometió al asumir la presidencia por la renuncia del corrupto PPK en marzo del 2018, cuyo eje era la lucha contra la corrupción de los representantes fujimoristas y apristas en el Congreso que tuvo que disolver. Esta reforma política está pasmada desde hace meses.

4 Ver este párrafo en la página 221. Como en otras novelas, Vargas Llosa, siendo un liberal conservador y anticomunista, rescata muchas veces tesis que son defendidas por socialistas y demócratas.

1 Ver: Mario Vargas Llosa; **Tiempos recios**; Penguin Rondon House-Grupo Editorial Alfaguara; Barcelona, 2019.

2 Ver: Alberto Flores Galindo; **Tiempo de Plagas**; Ediciones Caballo Rojo, Lima, 1987.

3 La novela culmina con la visita que Vargas Llosa hiciera a la salvadoreña Martha Borrero Parra (a) “Miss Guatemala”, amante del coronel Castillo Armas, ya muy anciana, en Virginia, Washington DC para entrevistarla sobre los sucesos de Guatemala y República Dominicana. La entrevista la hizo junto con sus amigos dominicanos Soledad Álvarez y Tony Rafal.

Hugo Cabieses es economista, ex asesor parlamentario (2015-2017 y 2019) y ex Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM (2011). Militante socialista y actual consultor sobre gestión sostenible de bosques, cambio climático, humedales Ramsar y derechos de los pueblos indígenas andinoamazónicos. Mail: hugocabieses@gmail.com

¿Y en el vecindario?

El **Ecuador** está en movilización social e indígena, temporalmente detenida por promesas que el gobierno no ha cumplido hasta ahora. En **Chile** continúa la insurgencia social e indígena, con paros nacionales y marchas que apuntan a abrir las alamedas de un proceso constituyente contra el “modelo neoliberal Piñera” de un “oasis” que resultó inexistente, básicamente por la codicia de sus minoritarias clases dominantes. La **Argentina** también está en movilización de las masas, pero estas han sido cooptadas por el triunfo electoral de los Fernández peronistas y la esperanza en ellos luego del desgobierno y bancarrota del neoliberal Macri.

En **Bolivia** los partidarios de Evo Morales continúan en movilización contra el golpe y los asesinatos provocados por los bolsonaros policial-militares financiados y alentados por la embajada yanqui, pero el proceso con enormes logros se suicidó, al menos momentáneamente - si esto fuera posible - por errores del Movimiento Al Socialismo MAS, centrados básicamente en el desconocimiento del referéndum de febrero del 2016 y en el deseo de la reelección indefinida por parte de la dupla Evo Morales-Álvaro García Linera.

Sin embargo, al escribir esta crónica, el MAS en la Asamblea Nacional - en la que tiene absoluta mayoría -, ha facilitado la convocatoria a nuevas elecciones en el plazo de 120 días, reconociendo en la práctica a la autoproclamada “presidenta interina” Jeanine Añez. Como se sabe, ésta se instaló con el apoyo del gobierno de los EEUU, los fusiles y los paramilitares, luego de la renuncia del presidente Morales, provocando una treintena de muertos, más de 600 heridos, decenas de detenidos y otros tantos perseguidos. En estos momentos ha retornado a Bolivia una tensa calma, pero han continuado las agresiones contra los partidarios y dirigentes del MAS ya que en la Asamblea no se ha podido lograr aún una ley de garantías para que no continúe la violencia.

La población de **Colombia** ha sido la última en ingresar a los incendios con movilizaciones urbanas, campesinas e indígenas que continúan a ritmo de vallenatos, cacerolazos y tomas de calles y carreteras, combinadas con asesinatos de dirigentes por parte del Duque aquel, que ha llamado a una Mesa de Diálogo que no augura resultados.

El **Brasil** está nuevamente en movimiento alzándose contra el incendiario Bolsonaro y el neoliberalismo religioso, acicateado por la libertad del paradigmático Lula. Finalmente el **Uruguay** fue al ballottage el domingo 23 de noviembre, en el que Daniel Martínez del Frente Amplio perdió las elecciones por estrechísimo margen -menos de 30 mil votos- ante Luis La Calle Pou del derechista Partido Nacional, lo que significará para el pueblo uruguayo el retorno a las calles y campos.

Crisis peruana en el contexto latinoamericano

El Perú, país de 32 millones de habitantes, heredero de tradiciones milenarias, heroicas luchas sociales por derechos, diversidad de razas y pueblos indígenas originarios, agrobiodiverso y multicultural, con inmensos recursos naturales, tiene todo para ser un país próspero.

Sin embargo, se encuentra desde el 2016 y quizá desde mucho antes, en crisis de su régimen político, económicamente estancado, socialmente postrado, ambientalmente agredido, acosado por la corrupción a todo nivel y gobernado desde hace décadas por un régimen neoliberal extractivista que excluye a las grandes mayorías de sus derechos fundamentales para poder **Vivir Bien** o mejor dicho impulsar desde abajo y adentro los **Vivires Bien** en nuestro país diverso y abigarrado.

Este panorama nacional se desarrolla en un contexto latinoamericano caracterizado por los siguientes rasgos generales:

1. La resurrección de la crisis económico-financiera internacional en pleno proceso

de “restauración conservadora” en el continente con guerras económicas, políticas, mediáticas y el rotundo fracaso del modelo extractivista-exportador;

2. Al menos desde el 2014, las continuadas agresiones políticas, ideológicas, mediáticas y militar-policiales contra los gobiernos progresistas y de izquierda en la región, especialmente sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil;-
3. La concentración de medios de comunicación en manos de una derecha confesional, conservadora y fascista, con agresiones mediáticas permanentes bajo pretextos agresivos como la llamada «guerra contra las drogas», el «crimen organizado» y las «actividades ilícitas»;
4. La criminalización de las movilizaciones, luchas justas e insurgencias socio-ambientales, indígenas y ciudadanas contra sus territorios, derechos y culturas, así como contra el enorme espacio de la región Andino-Amazónica, pulmón, riñón y fuente de agua dulce para el planeta, contra sus bosques, sus pueblos con saberes indígenas ancestrales y sus territorios; y,
5. La criminalización y persecución de la migración pobre que huye de sus países en busca de seguridad y mejores condiciones de vida, junto con el apoyo y financiamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus agencias a las iglesias conservadoras evangélicas, que cada día tienen mayor protagonismo en los procesos conservadores de América Latina.

Lo anterior está orientado por las clases dominantes de cada país a facilitar y desarrollar injerencias de los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, Europa, las transnacionales y la “oficina de colonias” llamada OEA, en nuestros asuntos internos a fin de apropiarse de nuestros recursos naturales, particularmente minerales, petróleo, agua, biodiversidad, bosques y los saberes ancestrales de las comunidades originarias. En suma, controlar la región Andino-Amazónica.

Sobre la coyuntura destituyente actual

El primer eje de coyuntura que desató la crisis en el Perú fue la corrupción pública, privada y de los políticos en general de derecha, centro e izquierda. Pero el otro eje es el piloto automático del “modelo” neoliberal con “silla giratoria”, impuesto por el fujimorismo en los 90 y continuada sin dudas ni murmuraciones por los cinco gobiernos del periodo “democrático” que se abrió a fines del 2000, lo que ha significado y significa:

1. La captura corrupta del Estado, la concentración de la riqueza y de la tierra, así como la ofensiva sobre las políticas sociales con impacto en la distribución del ingreso, profundizando la pobreza y la desigualdad social.
2. La ofensiva sobre nuestros bienes naturales como petróleo, minerales, agua, tierra, biodiversidad y aire que proporcionan ganancias extraordinarias a las grandes empresas y los corruptos privados y públicos, mediante la apropiación de la plusvalía social recaudada por el Estado.
3. La ofensiva contra los derechos conquistados históricamente por los trabajadores, los pueblos indígenas, las mujeres, los trabajadores, otros sectores, nuestro mar y nuestra Amazonía.
4. La dominación por parte de la ideología neoliberal de los corazones y mentes de las personas al buscar la colonización y homogenización de nuestros saberes y sentidos.

Actualmente vivimos en el Perú un **Proceso Destituyente** con protestas en las calles, valles y regiones, con una agenda social, ambiental, cultural y económica frente a la que el gobierno actual y muchos políticos hacen oídos sordos. Consideramos que lo que debemos comenzar cuanto antes es un **Proceso Constituyente**, por fuera de la actual constitución mafiosa de 1993⁵. En este proceso, el

5 Ver mi artículo con Oscar Ugarteche en el Semanario Brecha de Montevideo, republicado en Sin

último acto ha sido la disolución por decreto presidencial, el 30 de setiembre del 2019 del Congreso de la República y la convocatoria a elecciones parlamentarias para el 26 de febrero del 2020.

No obstante, tal como he señalado en un artículo reciente para ALAI, lo que tenemos que disolver son al menos 10 mitos que son propios de la propuesta ideológica del neoliberalismo extractivista salvaje⁶:

1. que somos un país minero-petrolero-gasífero extractivista;
2. que para superar la pobreza y la exclusión debe haber crecimiento continuado del PBI;
3. que cemento, arena, fierro y equipos, es lo que debe primar en las inversiones públicas y privadas;
4. que el neoliberalismo es económico-productivo y no ideológico-cultural;
5. que con exportación superaremos la exclusión y la competitividad-productividad;
6. que el agua, bosques, biodiversidad y Amazonía son bienes transables e infinitos;
7. que los pueblos indígenas y los indignados no pueden gobernar;
8. que el territorio no se debe ordenar porque ello inhibe las inversiones;
9. que la diversificación productiva es una propuesta de los comunistas-ecologistas; y,
10. que los corruptos son más y por lo tanto es poco lo que podemos hacer frente a ello.

El Perú en crisis de régimen político

Estamos en medio de una profunda crisis institucional destituyente, que puede abrir un proceso constituyente. Se trata de una crisis multifacética, determinada en parte por la crisis económica agravada por los desastres causados

Permiso de Barcelona: <http://www.sinpermiso.info/textos/la-crisis-peruana-del-caos-destituyente-al-ciclo-constituyente>.

6 Ver mi artículo en: <https://www.alainet.org/es/articulo/202633>.

por desastres ambientales de origen antrópico, la caída de los precios de los principales minerales que exportamos, la corrupción que devela los mecanismos del poder establecido, la crisis del Estado neoliberal puesto al servicio de los poderes fácticos, incapaz de responder a la situación y cada vez más deslegitimado, la emergencia de formas de sociabilidad y organización popular regresivas con un sentido común conservador, con salidas cada vez más represivas.

En este contexto, la resistencia popular en el Perú es explosiva pero desarticulada, que va generando un escenario destituyente, pero sin un sujeto político, social y cultural popular, democrático, que difícilmente se abrirá en el corto plazo a un proceso constituyente que transforme el Estado, la economía y la sociedad.

Estamos en un tiempo político-institucional marcado por los procesos electorales y la disputa del gobierno que se abrió por las elecciones generales de 2016, las regionales y locales del 2018 y las presidenciales del 2021 que coinciden con el bicentenario de nuestra independencia. Pero, a mitad de camino, este cronograma se alteró por la disolución del Congreso apro-fujimorista y la convocatoria a elecciones adelantadas en enero del 2020.

El tiempo político está marcado por la configuración de tres mitades electorales - ultraderecha autoritaria, derecha democrática e izquierda progresista - en medio de un reflujo producido por la traición del gobierno de Ollanta Humala a la apuesta de cambio de importantes sectores del país.

El renacimiento de la izquierda que obtuvo una importante votación en el 2016 y generó expectativas que debían ser canalizadas con la incorporación de amplios sectores ciudadanos y populares a la política. Tenemos la conformación de un gobierno débil políticamente - primero el estadounidense Pedro Pablo Kuczynski que renunció por corrupto y ahora Martín Vizcarra - consagrado a gerenciar los negocios de grupos de poder empresariales nacionales y transnacionales.


El resultado de lo anterior es la consolidación de una derecha conservadora y vinculada a poderes económicos legales e ilegales que tiene una mayoría parlamentaria aplastante y que debe moverse apostando entre consolidarse el 2019 para ser opción real de gobierno el 2021 y/o precipitar la caída del gobierno actual.

La izquierda y la conflictividad social

Las izquierdas y el movimiento popular aún se encuentran en crisis, con una caída de lo viejo y lenta emergencia de algo nuevo, en un proceso inicial de reagrupamiento de fuerzas que requiere de una mayor acumulación para acometer tareas estratégicas, así como la recomposición de sus proyectos/organizaciones que atraviesa al conjunto de las izquierdas y el movimiento social. Aún existe un débil enraizamiento de los espacios político-sociales en los territorios y en las dinámicas cotidianas de vastos sectores sociales y persiste una cultura política que se centra en la representación más que en la participación, en la pugna organicista y de aparatos más que en la multiplicación de la acción política. Los actores políticos y sociales actualmente existentes en el país son los siguientes:

1. El fujimorismo, populismo de derechas, ultraconservador, sostenido sobre redes corruptas, criminales y clientelares, que, desde la mayoría parlamentaria en el Congreso disuelto y en alianza con otras fuerzas políticas, venía generando condiciones para la concentración política y el desplazamiento del poder de las élites tecnocráticas y/o su asimilación en un posible gobierno.
2. Los empresarios de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), que han capturado desde diversos flancos al Estado a través de sus técnicos de lujo o “pilotos de bombardero” - que arrojan sus bombas sin importarles que sucede abajo -, que impulsan la “silla giratoria”, quienes, en alianza con el fujimorismo, ganaron la presidencia del Congreso de la República disuelto a través de uno de sus representantes.

3. El centro liberal como Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), el partido Morado y otros que pueden ser capaces de aglutinar a las clases medias o sectores emergentes asustados con la crisis.
4. Las izquierdas divididas y enfrentadas por apetitos de poder, siempre justificados en razones doctrinarias, incapaces de entender que deben actuar más allá de la lógica de frente en una apuesta de construcción ciudadana y popular más amplia.
5. Los gremios de izquierdas y los activismos de diverso tipo en crisis o marginales debido a que atienden las demandas de los reducidos sectores asalariados en la gran y mediana industria y sin capacidad de renovarse política, organizativa y tácticamente, como es el caso de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otros.
6. Los activismos atrapados en lógicas testimoniales sectoriales y vanguardistas como ecologistas, indigenistas, LGTBI, con dificultades para entablar un diálogo con la sociedad como ocurre con el feminismo y su dificultad de empatar con las demandas de la mayoría de mujeres.
7. Por último y no por ello menos importante, el senderismo y radicalismo étnico aún marginal a nivel nacional, pero con mucha voluntad política que avanza en sectores sociales organizados de algunas regiones y ciudades.

En suma, en este tiempo de plagas, se trata de DISOLVER los 10 mitos del neoliberalismo mencionados y de no darle la espalda a los problemas centrales del país como son la corrupción estructural y cotidiana, la democracia sustantiva y participativa, la persistencia del neoliberalismo extractivista, la porfiada búsqueda de mayoría electoral pero sin hegemonía político-ideológica a lo **Antonio Gramsci**, etc.⁷ 

Lima, 25 de noviembre de 2019

⁷ Ver: <https://www.alainet.org/es/articulo/188382>

Derrota electoral de Macri y la impugnación a la ofensiva del capital en Nuestramérica

Julio C. Gambina

El pasado domingo 27 de octubre se eligió un nuevo gobierno en la Argentina para el periodo 2019-2023, en una disputa electoral enmarcada en luchas y contradicciones diversas relativas al rumbo económico, social, político y cultural en Nuestramérica y en el mundo. Remito a los levantamientos populares recientes y por más de un mes en Chile; en Ecuador, Haití, o Colombia; como el proceso electoral en Bolivia, seguido del cruento Golpe de Estado que nos trae al presente la intervención militar y policial directa; las elecciones en Colombia con derrota de la fuerza gobernante, o el triunfo por escaso margen de la derecha en Uruguay, e incluso a las tensiones y luchas que protagonizan pueblos en todas las latitudes del sistema mundial. Un sistema en plena desaceleración económica y con tensiones diversas promovidas por el desorden que ejerce en las relaciones internacionales la política exterior de la potencia hegemónica: EEUU. Estas luchas populares, especialmente en Chile, constituyen impugnaciones a la ofensiva capitalista bajo hegemonía de las políticas neoliberales desplegada en los últimos cuarenta años.

Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, Buenos Aires. www.juliogambina.blogspot.com

Por eso, por todo lo que se juega en la región y en el mundo, no daba lo mismo el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, de Evo en Bolivia, o de una de las dos fórmulas que disputaron casi el 90% de los votos en la Argentina (un 48% para el “Frente de Todos” y un 40% para “Juntos por el Cambio”). Los perdedores en Argentina enarbolaban el discurso liberal, de derecha, y los que ganaron lo hicieron con un discurso crítico a la orientación aperturista y liberalizadora. Otras cuatro fórmulas apenas obtuvieron el 12% del electorado. Sin duda, una gran polarización electoral que definió la contienda en primera vuelta a la candidatura del frente liderado por la unidad del peronismo, con hegemonía del kirchnerismo. La polarización incluye considerar una importante cantidad de votos definidos por la negativa a votar a una u otra fórmula de la polaridad, en virtual anticipo y negación de una segunda vuelta o balotaje, lo que evidencia la construcción de novedosas identidades políticas en nuestro tiempo.

¿Qué sugiero? Qué la coalición que lideran los Fernández con el 48% de votos son más que la unidad del peronismo, o la vuelta del kirchnerismo gobernante entre 2003 y 2015, ya que expresan una coalición diversa que contiene en su seno identidades autodefinidas en un arco que se extiende desde la izquierda a la derecha, con matices en sus posiciones sobre temas estratégicos, entre otros relativos

al orden económico, social y a las relaciones e inserción internacional del país, especialmente cómo posicionarse sobre Venezuela. Pero también, que la coalición liderada por Macri se despide del gobierno con una cosecha del 40% de las voluntades electorales y con actos masivos de tipo callejero, atípico a una tradición ajena a todo aquello que no sea discreción y actividad política puertas adentro.

He sugerido en ocasiones anteriores que la novedad política post 2001 en la Argentina se manifestaba en el “kirchnerismo” y en el “macrismo”, quienes hegemonizan las coaliciones que disputaron gobierno en esta ocasión. En ambas coaliciones existen expresiones de los partidos tradicionales, peronismo y radicalismo, cuyas identidades son disputadas por personas cuyos nombres expresan corrientes diversas sobre el diagnóstico del presente y del futuro del país. Se trata de cambios en las identidades políticas, donde el peronismo y el radicalismo continúan siendo la tradición histórica, cobijando nuevos fenómenos que intentan distanciarse de la matriz originaria y configurar una nueva representación política.

La hegemonía de las coaliciones está en el kirchnerismo y en el macrismo, más precisamente en Cristina Fernández de Kirchner (CFK) por un lado y en Mauricio Macri por el otro. Junto a CFK coexisten un conjunto de mujeres y hombres que disputarán el legado y el liderazgo en el próximo tiempo, incluido el electo Presidente Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, e incluso una diversidad de dirigentes territoriales al frente de los gobiernos provinciales, locales y de sus respectivos parlamentos. Junto a Macri, se consolida en la sucesión el Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que repite mandato con el 55% de los votos (20 puntos de diferencia con el segundo, de la alianza Frente de Todos) y por cierto la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y algunos líderes del radicalismo, especialmente los que mantienen posición de gobierno en provincias y municipios, muy especialmente los que se encuentran en la zona más rica del país y vinculada al agro negocio, donde se hizo

fuerte la propuesta de la derecha, en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué situación queda luego del mandato de Macri (2015-2019)?

La situación es de inflación y recesión, con alza de precios más cercana al 60% para este año y una caída del PIB estimada en -3%; con una política económica que tiene entre los ganadores al complejo del agro negocio de exportación, con principal sustento en la soja y sus derivados bajo dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología; el complejo de la mega minería a cielo abierto; las petroleras y el nuevo objetivo de los hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta; las privatizadas de servicios públicos con sus dolarizadas tarifas; el sector de empresas transnacionalizadas de la industria de ensamble para el mercado mundial; y por supuesto la especulación financiera con la banca transnacional al frente y el elevado endeudamiento externo (casi 100% del PIB) y público favorecido por el FMI desde la corrida cambiaria del 2018.

Entre los perdedores se encuentra la mayoría de la sociedad, con una proyección de 40% empobrecidos hacia fin de año y un registro a mediados de año del 10,6% de desempleo abierto, una cifra superior de subempleo y un tercio de la fuerza de trabajo total en situación irregular, sin acceso a la seguridad social. La precariedad del empleo es un dato estructural con perspectivas de agravarse con la pretensión de reforma reaccionaria de las relaciones laborales, contra los convenios colectivos de trabajo, el derecho protectorio de trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sindicales, sociales y territoriales. Con ingresos por jubilaciones con la mayoría percibiendo el mínimo de una pirámide de ingresos achatada que pretende agudizarse con renovadas reformas contra los derechos de jubiladas y jubilados. Además de la mayoría de trabajadoras y trabajadores, el sector de la pequeña y mediana producción y empresaria

se ven también afectados ante la disminución de la capacidad de compra de la mayoría de la población y una inserción internacional que privilegia las exportaciones del sector integrado al sistema mundial del capitalismo contemporáneo.

Son ganadores y perdedores de un modelo productivo gestado bajo dictadura desde mediados de los 70, fortalecido en la década del 90 bajo gobiernos constitucionales, peronistas y radicales, y claramente potenciado en años de gobierno Macri. Las políticas neoliberales, liberales de este tiempo, definieron casi medio siglo de historia reciente, con periodos que intentaron morigerar el impacto social sobre sectores de menores ingresos, sin modificar los condicionantes estructurales:

- a. la tendencia a la afectación de los derechos, ingresos y condición socio económica de las trabajadoras y los trabajadores;
- b. el cambio reaccionario de la función estatal para favorecer la lógica de la ganancia y la promoción del capital privado, local y externo;
- c. una aceleración de la apertura del país al libre movimiento internacional de capitales, servicios y mercancías contra toda propuesta de inserción alternativa promovida desde la región en años recientes.

Las políticas neoliberales han generado una concepción cultural individualista, del sálvese quien pueda, base de sustento para el aval a una política de derecha, que por primera vez en la historia constitucional de la Argentina accedió por el voto al gobierno. La historia desde 1930 es que la derecha accedía al gobierno mediante golpes de Estado, para intentar subordinar al conjunto de la sociedad al mandato de las clases dominantes, que ahora desde 2015 intentaron perpetuarse por la vía electoral bajo la presidencia de Macri. Es algo a no subestimar con lo acumulado electoralmente (40%) y la movilización social visible de estos últimos tiempos. Ese consenso hizo po-

sible la experiencia de gobierno de Mauricio Macri, apoyada con endeudamiento público y sustentado desde EEUU, asociado al interés de Trump por ahogar al proceso venezolano con el objeto de obstaculizar cualquier intento crítico a las políticas pro capitalistas y, sobre todo, con interés en apropiarse de la enorme fuente de provisión de petróleo originario de Venezuela, la mayor reserva mundial del estratégico insumo. El gobierno de Macri reconoció al auto designado presidente de Venezuela y a su embajadora en la Argentina.

Al mismo tiempo debe señalarse que la derrota de Macri está precedida de cuantiosas movilizaciones populares durante su gestión, que incluye 5 paros generales del movimiento sindical; protestas contra los “tarifazos” de la dolarización de las tarifas de servicios públicos privatizados; un creciente movimiento feminista que supone la lucha por la igualdad de género, las diversidades y las disidencias, como diversas iniciativas contra el modelo productivo extractivista exacerbado y en defensa del medio ambiente y las condiciones de vida de la población. Esta movilización social en continuo es lo que abonó el camino para la derrota electoral del gobierno de la derecha.

Para pensar en lo que viene

Resulta complejo pensar el futuro cercano de la Argentina, por el condicionante estructural del modelo productivo hegemónico y los derivados del acuerdo con el FMI. Ahí está la demanda del poder económico local y mundial, que apunta a sostener el mecanismo de apropiación de plusvalor entre los capitales más concentrados que actúan en el país. De otro lado se demanda atender la emergencia alimentaria de una mayoría social empobrecida y salir de manera urgente de la recesión y el proceso de aceleración inflacionaria de los precios.

Más allá de un discurso crítico a las políticas de Macri, es aún prematuro definir por donde transitará la política oficial del próximo gobierno que asumirá el 10/12 próximo. Aún no hay designaciones de futuros funcionarios, aunque

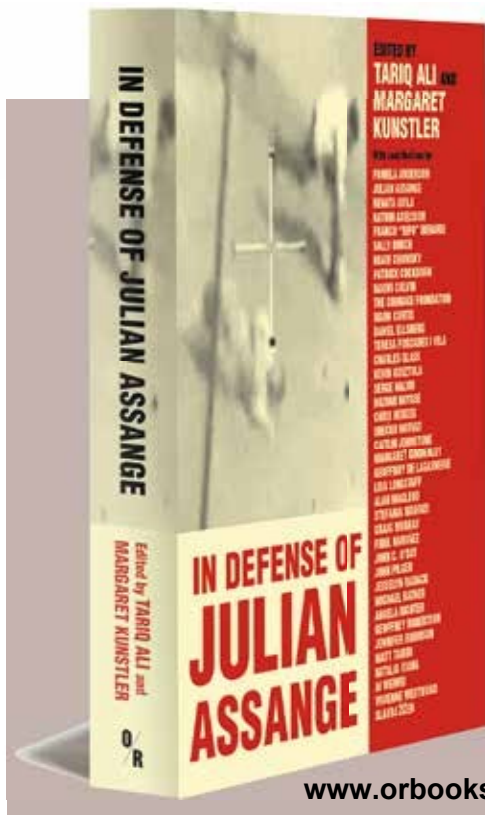
si manipulación mediática de candidatos con antecedentes y posiciones no siempre convergentes, por lo que habrá que esperar se anuncie la composición del Gabinete y las políticas concretas a encarar. Podemos anticipar que, si no existen respuestas inmediatas, es muy probable que escale el conflicto social, sustentado en la tradición de luchas y organización de la Argentina, pero también estimulado por el clima social del momento en la región.

Qué hacer con la deuda es un gran interrogante. El FMI y EEUU han señalado disposición a la renegociación de los vencimientos, incluso llamada telefónica desde Trump para saludar al presidente electo y colocar a EEUU y al FMI a disposición para iniciar renegociaciones. Esta voluntad no incluye necesariamente flexibilizar la condicionalidad por el ajuste fiscal y las reaccionarias reformas laborales, previsionales e impositivas contenidas en el acuerdo con el FMI. Existe una opinión alternativa, que privilegia atender las acreencias sociales antes que la de los acreedores externos, lo que supone postergar cancelaciones de deuda, la que debe

someterse a proceso previo de investigación y auditoría, tanto de las nuevas deudas de este último periodo, pero también de la acumulada desde tiempos de la dictadura genocida. La investigación constituye una asignatura pendiente, aun cuando existe un importante avance en la Justicia, incluso con sentencias no ejecutadas. Se sostiene que mientras se investiga deben suspenderse los pagos.

Es cierto que no se puede modificar de un momento a otro el modelo productivo, pero la impugnación a la lógica neoliberal solo puede prosperar si se apunta contra la dinámica de acumulación capitalista, lo que solo es pensable desde una fuerte intervención organizada y movilizadora de la sociedad con disposición a transformar conscientemente la realidad. No hay posibilidad de resolver la demanda social y el sentido principal del voto con medidas de política económica que no confronten con el orden capitalista. ☞

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2019



In Defense of Julian Assange

(En defensa de Julian Assange)

Los cargos que enfrenta Assange son una gran amenaza para la libertad de prensa y su liberación es uno de los asuntos políticos más importantes de nuestros días .

Crear apoyo para Assange e impedir que llegue a manos de la administración Trump es el propósito urgente de este libro. Unos 40 colaboradores de renombre exponen la historia de Julian Assange y WikiLeaks, la importancia de su trabajo y los peligros para la humanidad que significa la persecución que enfrentan .

Editado por Tariq Ali y Margaret Kunstler.
Publicado por OR Books

www.orbooks.com/catalog/in-defense-of-julian-assange

Uruguay: los pliegues de una excepcionalidad histórica

Emilio Cafassi

Es muy infrecuente que a Uruguay se le otorgue algún titular en la prensa hegemónica o en los medios audiovisuales del *mainstream*. A la hora de interrogar las causas, la reacción epidérmica atribuirá escasez de magnitudes o igualación al contexto de los países periféricos que comparten con el rioplatense su eclipsada realidad a los ojos de autoreferenciales dominadores. La historia es tanto una sucesión de narraciones y énfasis que disputan asignación de sentido, cuanto contrariamente, una hilada de omisiones e indiferencias que, sin embargo, persiguen idéntico propósito. Aunque no resulte sorprendente, varias particularidades que distinguen a esta esquina de Sudamérica suelen soslayarse. En el campo historiográfico particularmente el de una verdadera revolución modernista-liberal en los inicios del siglo XX con los gobiernos de Batlle, quien instaura un Estado de bienestar, de impronta secular, de derechos y libertades del que brota una cultura cívica inimaginable para estas latitudes y hasta para buena parte del mundo de entonces. La profundidad alcanzada explica que tal vanguardismo haya sido ferozmente combatido, parcialmente revertido con violencia ya en la década del '30 y posteriormente olvidado. Más cerca en el tiempo, Uruguay tampoco logró eludir la brutal ofensiva antiobrera y represiva de los '60 cuando se extendían los encarcelamientos, la conculca-

ción de derechos constitucionalmente básicos y la clausura sistemática de medios de prensa durante el gobierno de Pacheco Areco. Menos aún, la posterior asolada de golpismos latinoamericanos de los '70, devenidos terrorismos de Estado, coordinados en el plan Cóndor.

Sin embargo, ese Uruguay jaqueado fue produciendo potentes anticuerpos que una vez fundados comenzaron a actuar. Amplias convergencias sindicales combativas, como la de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en los '60 y la guerrilla urbana del MLN-tupamaros, el Frente Amplio (FA) como opción política en el '71 y -como corolario del desmoronamiento de la dictadura- la creación del Plenario Intersindical de los Trabajadores (PIT) y la unificación definitiva del movimiento obrero bajo la sigla PIT-CNT en los '80. Aquella expresión política de resistencia al inmenso autoritarismo del gobierno de Pacheco Areco, el FA, estuvo apoyado en dos pilares principistas casi elementales como el anti-imperialismo y la antioligarquía, pero en términos tácticos en la superación del carácter meramente testimonial del caudal electoral de partidos de izquierdas y progresistas aislados. De este modo, acudiendo a lo sintetizado en estos dos párrafos, el FA nace como lucha contra el descaecimiento del Estado liberal-moderno que fue imponiendo la oligarquía vernácula y el imperio, pero concibiendo a la lucha electoral como camino de acumulación y transformación social por oposición a la guerrilla tupamara autoexcluida del frentis-

Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires

mo. Expresión política reformista, por tanto, que por un lado recupera las mejores tradiciones liberales del siglo pasado, conteniendo en ellas el electoralismo, aunque a diferencia de la gran mayoría de los reformismos en el mundo pasado o presente, incluyó e incluye orgánicamente a izquierdas radicales en su estructura.

En consecuencia, el FA se funda como expresión unitaria de una gran diversidad teórica, ideológica y metodológica (en extremos de un arco de tal magnitud donde podríamos genéricamente ubicar al trotskismo y anarquismo de un lado y a la socialdemocracia y el socialcristianismo en el otro) que obtiene en las elecciones del mismo año -casi inmediatamente después de su fundación- una valiosa recompensa electoral de algo más del 18%, reafirmando la eficacia del proyecto que le dio origen. Pero más aún logró afirmarse mediante un protagonismo excluyente en la resistencia a la dictadura, en las cárceles, en los exilios, en los múltiples puentes de solidaridad con las víctimas del horror.

No es la amplitud del abanico ideológico la que considero mayor originalidad del FA, sino el hecho de no haber sido exclusivamente una coalición de partidos políticos, sino además, una articulación de militantes independientes o no de ellos, aunque siempre organizados en los territorios o sectores de actividad, mediante la estructura de los llamados “comités de base”. En reconocimiento a la heterogeneidad también organizativa (dividida entre comités y partidos o sectores) el FA le otorga a “las bases”, la mitad de la representatividad en las instancias colegiadas de dirección.

Caída la dictadura, emergieron junto al sindicalismo unificado, diversos movimientos sociales -con más espontaneidad y heteronomía- para capturar bajo formas variadas, demandas menos tradicionales en aspectos sumamente amplios que van desde las laceraciones del horror hasta las carencias y discriminaciones más vastas de sectores sociales oprimidos. No sólo el carácter progresista del FA permitió

acoger las demandas de los movimientos, sino también fue la existencia de bases con cierta autonomía, la que facilitó diálogos, interacción multimilitante y hospitalidad política.

El FA no sólo fue insertándose en la sociedad y sus luchas, sino creciendo electoralmente después de su despegue definitivo en la década del '90 (no casualmente luego de la integración de tupamaros) que obligó a los partidos tradicionales a negociar una reforma constitucional. Incorporaba el ballottage en caso de no obtener mayoría absoluta, a cambio de la eliminación parcial de la ley de lemas que permitía toda clase de candidaturas presidenciales al interior de los partidos. Tan solo en la elección posterior a la reforma, ganada por el FA con el 39%, la derecha logró vencer en el ballottage por 54% a 46%. En la siguiente del 2004, ni siquiera se llega a segunda vuelta porque el FA se impone por el 51,68% obteniendo holgadas mayorías parlamentarias.

La sucesión de tres gobiernos frentistas no hizo más que mejorar la totalidad de los indicadores sociales como jamás hubo en la historia del país. Comenzando por el crecimiento sostenido del PBI, con viento de cola (como suele referir despectivamente la derecha al boom de las *commodities*) de frente o cruzado. Con un inicio a “tasas chinas” y una posterior mengua, en promedio los gobiernos frentistas se acercan al incremento del 5% anual. Claro que existe un debate legítimo en torno a la matriz productiva, pero la magnitud de la riqueza se ha expandido geométricamente.

El gasto social en relación al producto aumentó del 19,5% al 25,2%, mientras la pobreza sufrió una reducción del 32,5% a menos del 9% en la actualidad y la indigencia del 2,2% al 0,3%. El gasto social en salud no solo se ha incrementado en términos absolutos sino respecto al producto del 3,2% al 6,1%. El antiguo impuesto regresivo a los salarios, fue sustituido por uno progresivo que se extiende además a otros ingresos profesionales del que están excluidos los salarios más bajos. El IVA a la canasta básica sufrió una reducción del 4%. El

incremento en educación fue del 3,2% al 4,7% del producto, lo que implica un salto enorme, aunque no haya podido cumplir la meta del 6% comprometido en el programa. Las inversiones en infraestructura o centros educativos han sido relevantes en general, pero más lo es el énfasis en la descentralización de la universidad que permitió que llegue al interior del país. Los salarios docentes se incrementaron muy por encima de la inflación que a la vez está en un dígito.

Estos indicadores tan resumidos podrían explicar algo del porqué el FA pudo ganar las dos elecciones sucesivas (aunque con una mengua hacia el límite de las mayorías parlamentarias y apelando al ballottage en las últimas) mientras esta última se encuentra sometida al conteo final de los votos observados mientras escribo estas líneas. Pero no pueden explicar plenamente que en 2014 se llegara con el último aliento del 48% indispensable para ganar las legislaturas o que en la primera vuelta de octubre se haya perdido cerca de 8% de los votos ni la emergencia por primera vez en la historia uruguaya de un partido neofascista dirigido por un general que obtiene 11% del electorado. Como tampoco puede explicarse mecánicamente por la exitosa realidad económico-social boliviana la caída electoral del MAS del 61% al 47%, ni el golpe terrorista actual que a la vez alienta las bravatas e invectivas golpistas de la ultraderecha uruguaya. ¿Por qué poner en cuestión el electoralismo si es la táctica original del '71 y es parte de la gran transformación liberal? ¿Por qué dudar del peso del parlamentarismo cuando las bancas resultan un instrumento de intervención transformadora en la vida social? Porque el problema reside en el peso que han adquirido estas tácticas en detrimento de la militancia de base, de la movilización y la lucha cotidiana de cercanía. No es atribuible

a representantes, sino a una concepción que incluye a representados que delegan sus funciones y control en manos profesionales que jamás podrán suplirlos a largo plazo.

Muchas alarmas han sido desoídas. Algunas cualitativas y de difícil generalización como la desertificación de los comités de base ante la indiferencia de las autoridades formales, parcialmente compensada por la participación en movimientos sociales y partidos frentistas, la escasa rotatividad en candidaturas, los síntomas de burocratización y autonomización de los dirigentes respecto a sus dirigidos. Otras cuantificables como la -primeramente leve-tendencia de caída de votos en primera vuelta en el 2009 y 2014 de casi 4% respecto al triunfo original del 2004, que en las elecciones internas de los mismos años supuso una caída, ya nada leve de casi 12% hasta el derrumbe en los comicios de este año. En efecto, en primera vuelta el FA tuvo una caída de algo más del 8% con la consecuente pérdida de mayorías en ambas cámaras.

Sin embargo, aún desconociendo el resultado del ballottage, el elector uruguayo le dio al FA el estilo de la epopeya, aún derrotado. Logró recuperar todo lo que se había perdido desde la elección previa en primera vuelta aunque le haya quedado esquivo la diferencia con el ballottage pasado igualar su última marca. Ya en aquella elección -al igual que en estas encuestadoras lo daban perdedor. Cuando se conoció la victoria, se le preguntó por la causa a la actual vicepresidenta Lucía Topolansky, esposa de Pepe Mujica, ésta respondió que el susto había despertado al borracho. El mismo susto acudió en este ballottage con una nueva excepcionalidad recuperando no sólo votantes sino militantes.

Tal vez no resulte tan tarde. ◀

Bolivia ante el peligro del retroceso histórico y de la restauración neoliberal

Eduardo Paz Rada

El golpe de Estado producido en Bolivia el pasado 10 de noviembre, cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pidieron la renuncia del presidente Evo Morales Ayma, concentra un momento culminante de la lucha de clases, el racismo y la lucha antiimperialista en el país a través de los principales actores sociales y políticos que protagonizaron el enfrentamiento: por una parte las clases medias y acomodadas blancoides dirigidas por las oligarquías locales y por otra las clases populares constituidas por trabajadores, indígenas, campesinos, mineros, mujeres del pueblo, vecinos de las periferias urbanas y sindicatos.

El discurso racista y discriminatorio acompañado del fundamentalismo religioso conservador se impusieron a través de quienes dirigieron el golpe como el dirigente cruceño Fernando Camacho, los jefes policiales que se amotinaron contra el gobierno, la autonombraada presidenta Jeanine Añez, las redes de internet y los medios de comunicación y fueron los fusiles, las ametralladoras y los tanques militares los que ejecutaron operaciones en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) con el saldo de más de veinte muertos de los treinta y cuatro en todo el país del 11 al 25 de noviembre.

Los operadores del imperialismo, a su vez, fueron Jorge Quiroga, ex vicepresidente de Hugo Banzer, Carlos Sánchez Berzain y Carlos

De Mesa, exministro de gobierno y exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, respectivamente; los dos primeros coordinando con los grupos anticomunistas cubanos asentados en Miami, entre ellos los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, y el lamentable papel de Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos (OEA). El argumento del fraude electoral fue esgrimido por el movimiento golpista.

Las elites tradicionales, sus partidos, sus medios de comunicación y sus Comités Cívicos, apoyados por masivas movilizaciones urbanas y articuladas por el imperialismo, en una operación estratégica de desestabilización e implementación de la escalada golpista, reaccionaron violentamente frente a su desplazamiento histórico causado por la organización y movilización democrática de las clases excluidas y subalternas que lograron, en los últimos quince años, a través del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los Movimientos Sociales articulados por el liderazgo de Morales, transformar radicalmente la democracia, la política, la economía y la sociedad boliviana.

La histórica lucha de los desposeídos y marginados contra el colonialismo interno y externo, contra el imperialismo y la oligarquía tuvo su momento constitutivo en la guerra del agua del año 2000, primero, y en la guerra del gas en octubre de 2003, contra el neoliberalismo que estaba carcomiendo las entrañas del país, tanto con la explotación de los trabajadores del campo y la ciudad como de los recursos naturales mineros, petroleros, acuíferos agrí-

Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.

colas y forestales.

Evo Morales Ayma, desde su condición de dirigente sindical de los campesinos y cocaleros y luego como parlamentario nacional, consiguió organizar el Movimiento Al Socialismo (MAS) y articular a las clases subalternas de los Movimientos Sociales y Populares para ganar las elecciones nacionales en cuatro oportunidades (2005 con el 53%, 2009 con el 64%, 2014 con el 61% y 2019 con 47%). Su gobierno desde 2006 llevó adelante una política revolucionaria antineoliberal y antiimperialista en un proceso nacional-popular de transformaciones económicas, ideológicas, políticas, sociales, culturales e internacionales de gran alcance.

Sus posturas antiimperialista, anticolonial y antineoliberal fueron los principios del proyecto liberador.

Sobre la base de la defensa de la soberanía y la dignidad nacionales su gobierno emprendió el cumplimiento de “la agenda de octubre de 2003” con la nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo de 2006, que se encontraban en poder las transnacionales Repsol de España, Total de Francia, British de Inglaterra, Pacific de Estados Unidos y Petrobras de Brasil; luego con la recuperación de las empresas de energía, telecomunicaciones, minería, fundiciones; y posteriormente con el inicio del proceso de industrialización de los recursos naturales, en particular el gas natural y el litio de las salmueras de Uyuni.

Frente a este esfuerzo y avance nacionalista y popular, en 2008 las fuerzas conservadoras y neoliberales de las oligarquías del oriente impulsaron el separatismo y la guerra civil apoyados por el embajador de Estados Unidos, Philip Golberg. Este intento fue derrotado y el embajador norteamericano fue expulsado de Bolivia, se rompieron relaciones y también se expulsó a la DEA (lucha antidrogas) y a USAID (ayuda “americana”).

El proceso siguió adelante con una política orientada al crecimiento económico sostenido

durante quince años (promedio del crecimiento PIB 5% anual), cambio monetario estable (menos de 7 Bs por dólar durante quince años), inflación anual menor al 5%, con redistribución de la riqueza y de los excedentes a los sectores más necesitados no solamente con una amplia distribución de rentas mensuales a la población anciana que nunca tuvo una jubilación, a los niños para garantizar su asistencia a la escuela, a las mujeres embarazadas para tener un parto seguro; sino también con la instalación de los servicios básicos de energía eléctrica, agua, gas domiciliario, telecomunicaciones, caminos y carreteras para asegurar la integración interna de las regiones olvidadas del país.

De esta manera se consiguió que la pobreza se reduzca en catorce años del 60% de la población al 35% y la extrema pobreza del 38% al 16% de la población, las desigualdades también disminuyeron drásticamente, según el índice de Gini cayó de 0.61 a 0.44 entre 2005 y 2018, los ingresos reales aumentaron sostenidamente y el salario básico pasó de 400 Bs a 2100 Bs en ese mismo periodo, se redujo la deserción escolar y también la mortalidad infantil y materna infantil; cifras históricas en el país que era considerado el más vulnerable, atrasado y dependiente de América del Sur.

Los campesinos y las campesinas, la inmensa mayoría indígenas, consiguieron, después de un proceso de recuperación y saneamiento de tierras, su distribución y titulación de tierras y territorios de manera masiva, al tiempo que conseguían que su bandera de identidad, la wiphala, se convierta en símbolo nacional.

En el aspecto político, las instancias ejecutivas en los ministerios, gobernaciones y alcaldías municipales, así como las legislativas de las Asambleas Plurinacional, Departamentales y Municipales se transformaron radicalmente en su composición social, donde antes solamente ejercían poder las elites blancoides ahora se encuentran los indígenas y los cholos y mestizos mayoritariamente, incluyendo los niveles de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Las mujeres se han convertido en protagonistas centrales de la política, su representación en las instancias legislativas superan el 50%, al igual que los senadores, diputados y asambleístas locales que son jóvenes e indígenas aymaras, quechuas, guaraníes o mojeños, en una revolución cultural y democrática sin precedentes y de alta intensidad.

En el campo internacional, Bolivia ganó un espacio importante tanto por su participación en los procesos de unidad e integración latinoamericana y caribeña, marcados por el pensamiento bolivariano y chavista, como en Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como en las iniciativas internacionales en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y con el Papa Francisco con el impulso y la aprobación de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra y la cultura de paz entre los pueblos y países del mundo.

Retorna el pasado

Con el gobierno actual las conquistas históricas de carácter social, político, cultural y económico de las clases subalternas, del estado plurinacional y de la sociedad boliviana comienzan a tambalear: primero con la decisión de liberalizar las exportaciones agroindustriales, principalmente soya y aceites, que benefician a la oligarquía terrateniente del oriente, después con los anuncios de privatizar o “capitalizar” empresas estatales y luego con la transferencia a una administradora privada de la empresa estatal de aviación comercial BOA. La libertad de prensa está controlada y restringida y han sido cerradas las transmisiones de canales de televisión como Telesur y Rusia Today.

La persecución y detención de dirigentes y exautoridades de gobierno continúan bajo el amparo de un discurso que denuncia acciones de “sedición y terrorismo”.

Con el paso de pocos días no resultó una sor-

presa que la autoproclamada presidenta Añez haya sido reconocida rápidamente por el imperialista gobierno del ultraconservador y supremacista blanco Donald Trump, al igual que por el gobierno del también ultraconservador evangélico Jair Bolsonaro de Brasil y que se haya comunicado telefónicamente con el autoproclamado “presidente” de Venezuela Juan Guaidó. Su política exterior se estrenó con el nombramiento de Oscar Walter Serrate como embajador de Bolivia en Estados Unidos.

Evo Morales fue asilado y recibido en México por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de una serie de problemas para salir de Bolivia, entre ellos la amenaza de detención por los militares y policías y la anulación de permisos de vuelo sobre suelo peruano y ecuatoriano, los que fueron solucionados por gestiones del propio López Obrador y especialmente del futuro presidente de Argentina, Alberto Fernández. Morales demanda garantías para retornar a Bolivia.

En medio de una correlación de fuerzas muy dinámica y con negociaciones en torno a la salida institucional con nuevas elecciones para los primeros meses de 2020, se presenta un panorama tenso y complejo. Los antagonismos muestran por una parte al gobierno de facto que controla el poder ejecutivo apoyado por los partidos neoliberales y conservadores, los Comités Cívicos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y por otra a la mayoría del poder legislativo bajo control del MAS, los movimientos populares en estado de emergencia, los sindicatos, los cocaleros y los campesinos del país. El rechazo internacional al golpe de Estado es contundente.

Tomando en cuenta la geopolítica regional y mundial, el golpe de Estado realizado en Bolivia abre un espacio más a la dominación norteamericana en América Latina en su pugna con las potencias presentes en la multipolaridad internacional, especialmente China, India y Rusia. Por otra parte la conspiración oligárquico-imperialista tiene al frente la resistencia y experiencia de lucha del pueblo boliviano. ◀



- > realidad regional
- > actualizada diariamente
- > dinámicas sociales
- noticias, opinión y análisis
- > más de mil documentos clasificados
- búsquedas por tema, autor, fecha, país, palabra clave

www.alainet.org

GLOBAL INFORMATION SOCIETY WATCH 2019

*Artificial intelligence:
Human rights, social justice and development*



Asociación por Progreso Comunitario (APC)
Artículo 19, with Technical International Development Cooperation Agency (TIDA)

La edición 2019 de la Global Information Society Watch ofrece una perspectiva desde el Sur global sobre la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la vida cotidiana.

La edición destaca las amenazas reales a las que debemos enfrentarnos para construir un futuro basado en la IA que permita la dignidad humana.

Incluye informes sobre temas como la gobernanza de datos, la soberanía alimentaria, la IA en el lugar de trabajo y los "robots asesinos" además de 43 informes nacionales y regionales.

Mayor información: www.giswatch.org